

36ª REUNION — 6ª SESION EXTRAORDINARIA — 10 DE ABRIL DE 1985

**Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor EDISON OTERO**

Secretarios: doctores ANTONIO J. MACRIS y LEONARDO JUSTO PALOMEQUE

Prosecretarios: doctor ALBERTO J. B. IRIBARNE y señor DESIDERIO LAUREANO ALMIRÓN

SENADORES PRESENTES:

AMOEDO, Julio A.
ARAUJO, Ramón A.
BERHONGARAY, Antonio T.
BITTEL, Deolindo F.
BRASESCO, Luis A. J.
BRAVO HERRERA, Horacio F.
BRITOS, Oraldo N.
CASTRO, Jorge A.
CELLI, Felipe
CONCHEZ, Pedro A.
DE LA RÚA, Fernando
FALSONE, José A.
FERIS, Gabriel
GASS, Adolfo
GIL, Francisco
GÓMEZ CENTURIÓN, Carlos E.
GURDULICH de CORREA, Liliana I.
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.
LECONTE, Ricardo G.
LEÓN, Luis A.
MALHARRO de TORRES, Margarita
MARINI, Celestino A.
MARTIARENA, José H.

MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo
MURGUIA, Edgardo P. V.
NAPOLI, Antonio O.
NIEVES, Rogelio J.
OTERO, Edison
RIVAS, Olijela del Valle
RODRIGUEZ SAA, Alberto J.
SALIM, Luis
SANCHEZ, Libardo N.
SAPAG, Elías
SIGAL, Humberto C.
SOLANA, Jorge D.
TRILLA, Juan
VELAZQUEZ, Héctor J.
VILLADA, Francisco R.
WOODLEY, Kenneth W.

AUSENTES, CON AVISO:

ALMENDRA, Ramón A.
BENITEZ, Alfredo L.
MATHUS ESCORIHUELA, Miguel A.
MAUHUM, Fernando H.
SAADI, Vicente L.
VIDAL, Manuel D.

industrial establecido por el decreto 261/85. (Pág. 3630.)

- L.—Proyecto de comunicación del señor senador Nápoli sobre cumplimiento del servicio militar en unidades próximas a la residencia del ciudadano. (Página 3632.)
- LI.—Proyecto de resolución del señor senador Nápoli por el que se adhiere al júbilo del pueblo brasileño con motivo de la asunción de las autoridades constitucionales. (Pág. 3633.)
- LII.—Proyecto de comunicación del señor senador Brasesco por el que se requiere la realización de obras complementarias para el funcionamiento del puerto de la ciudad de Concepción del Uruguay. (Pág. 3633.)
- LIII.—Proyecto de ley del señor senador Sigal sobre modificación del Código de Comercio. (Pág. 3634.)
- LIV.—Proyecto de ley del señor senador Sigal sobre modificación de la ley 17.531 (servicio militar). (Pág. 3634.)
- LV.—Proyecto de resolución del señor senador Sigal por el que se declara de interés nacional el Primer Congreso Latinoamericano de Hidrocarburos y Primera Exposición de Bienes y Servicios producidos en Latinoamérica para la Industria Hidrocarburífera. (Pág. 3635.)
- LVI.—Proyecto de comunicación del señor senador Marini por el que se solicita información sobre los montos girados a la provincia de Santa Fe en concepto de fondo de desarrollo nacional. (Página 3636.)
- LVII.—Proyecto de comunicación del señor senador Marini por el que se solicita información sobre los montos girados a la provincia de Santa Fe en concepto de aportes del Tesoro nacional no reintegrables. (Pág. 3636.)
- LVIII.—Proyecto de comunicación del señor senador Sánchez por el que se solicita declarar de interés nacional el II Congreso Nacional de Guías de Turismo. (Pág. 3637.)
- LIX.—Proyecto de comunicación del señor senador Sigal por el que se solicita un subsidio para la Municipalidad de El Maitén, Chubut. (Pág. 3637.)
- LX.—Proyecto de ley del señor senador Vidal sobre creación de una escuela técnica de nivel superior en Famailá, Tucumán. (Pág. 3638.)

LXI.—Proyecto de ley de los señores senadores Gil, Murguía y Sánchez sobre derogación de la ley 22.259 (reformas al Código de Minería), y designación de una comisión para la redacción de un nuevo código. (Pág. 3638.)

LXII.—Proyecto de decreto del señor senador Sánchez sobre confección de medallas de honor para los combatientes de Malvinas. (Pág. 3640.)

LXIII.—Proyecto de comunicación del señor senador Sigal y otros señores senadores por el que se requiere la adopción de medidas para la recuperación de la capacidad técnica y financiera de distintas empresas del Estado. (Pág. 3640.)

LXIV.—Proyecto de ley del señor senador Sigal sobre limitación de las medidas de eximición de las leyes 22.249 y 22.268. (Pág. 3641.)

LXV.—Proyecto de ley del señor senador Villada sobre el Plan de Reversión Económica. (Pág. 3641.)

LXVI.—Proyecto de comunicación de la señora senadora Gurdulich de Correa por el que se solicitan informes sobre beneficios otorgados a ex combatientes de Malvinas. (Pág. 3642.)

2.—A moción del señor senador Menem se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se autoriza a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a donar al Reino de España una fracción de terreno. (Pág. 3643.)

3.—Moción de preferencia del señor senador Nápoli para considerar en la sesión de mañana el proyecto de ley sobre violencia en el fútbol. Se aprueba. (Pág. 3644.)

4.—A pedido del señor senador Brasesco se resuelve girar a la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública, con recomendación de pronto despacho, el proyecto de comunicación vinculado con el suministro de insulina. (Pág. 3645.)

5.—Moción de preferencia del señor senador Veázquez para considerar en la sesión de mañana el proyecto de comunicación sobre indemnizaciones pagadas por expropiaciones para la obra de Yacyretá. Se aprueba. (Pág. 3645.)

6.—Moción de preferencia del señor senador Brasesco para considerar en la sesión de mañana el proyecto de ley vinculado con las remuneraciones del personal judicial y la autarquía de la Suprema Corte de Justicia. Se aprueba. (Pág. 3645.)

7.—Moción del señor senador Britos de pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 17. Se aprueba. (Página 3646.)

8.—Apéndice:

Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 3646.)

—En Buenos Aires a las 19 y 39 del miércoles 10 de abril de 1985.

Sr. Presidente (Otero). — Queda abierta la sesión.

I

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Otero). — Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados, que oportunamente fueron girados a las comisiones por la Presidencia, de acuerdo con la autorización conferida por el cuerpo.

Sr. Secretario (Macris). — (Lee):

I

Comunicaciones de la Presidencia

Decreto del 11 de marzo de 1985, por el que se designa una comisión integrada por los señores senadores León, Amoedo, Bravo Herrera y Feris, y como secretario de la misma el señor Héctor Grinspun para que, en representación de esta Honorable Cámara, concurren a la 73ª Conferencia de la Unión Interparlamentaria, en la ciudad de Lome, República de Togo, del 21 de marzo al 4 de abril de 1985. (A sus antecedentes.)

—Decreto del mismo día, por el que se designa al señor senador Otero para integrar, en representación de esta Honorable Cámara, la comitiva del señor presidente de la Nación en su viaje a los Estados Unidos de América, entre los días 17 y 28 de marzo del corriente año. (A sus antecedentes.)

—Decretos del 11 y 13 de marzo, por los que se designa a los señores senadores Trilla, Woodley, Maumhum, Gómez Centurión, Leconte, Amoedo, Rivas y Menem para que, en representación de esta Honorable Cámara, viajen a Japón y Corea, entre los días 15 de marzo y 10 de abril del corriente año. (A sus antecedentes.)

—Decreto del 20 de marzo de 1985, por el que se designa a los señores senadores Gass y de la Rúa para que, en representación de esta Honorable Cámara, concurren al seminario "Argentina y la comunidad europea. Relaciones políticas y económicas", en la ciudad de Bonn, República Federal de Alemania, entre los días 23 y 30 de marzo del corriente año. (A sus antecedentes.)

—Decreto del 29 de marzo de 1985, por el que se designa a los señores senadores Almendra y Saadi para

que, en representación del Honorable Senado de la Nación, viajen a la ciudad de Cleveland, estado de Ohio, Estados Unidos de América, entre el 6 y el 20 de abril del corriente año, por invitación del Centro Hospitalario y la Universidad de dicha ciudad. (A sus antecedentes.)

II

Acuerdos

Mensajes del Poder Ejecutivo, por los que se solicitan acuerdos y se retiran otros pliegos. (A la Comisión de Acuerdos.)

III

Convenio y recomendaciones adoptadas en la 69ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. — Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 28 de febrero de 1985.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo nacional tiene el agrado de dirigirse a vuestra honorabilidad remitiendo adjunto el texto auténtico de los siguientes instrumentos internacionales adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 69ª reunión, celebrada en Ginebra (Suiza) del 1º al 22 de junio de 1983.

Convenio 159: sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas (1983).

Recomendación 168: sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas (1983).

Recomendación 167: sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad social (1983).

La constitución de la Organización Internacional del Trabajo en su artículo 19, párrafos 5 y 6, dispone que cada uno de los Estados miembros de la misma se obliga a someter los convenios y recomendaciones adoptados por las distintas conferencias "a la autoridad o autoridades a quienes compete el asunto, a efecto de que le den forma de ley o adopten otras medidas".

En orden a ello corresponde señalar la diferencia que existe entre la obligación de someter los convenios y recomendaciones internacionales a la autoridad competente y la decisión de ratificar los primeros.

Mientras que mediante la sumisión se da a conocer el texto de los citados instrumentos al Poder Legislativo, por la ratificación se asumen obligaciones concretas, destinadas al cumplimiento de las normas convencionales.

Cabe manifestar a vuestra honorabilidad que solamente son materia de ratificación los convenios, en tanto las recomendaciones se someten al Poder Legislativo con el único propósito de que se adopten, de considerarse procedente, las medidas que se estimen adecuadas para efectivizar los principios orientadores que las mismas contienen.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 413

RAÚL R. ALFONSÍN.

Hugo M. Barrionuevo. — Dante Caputo.

y despojada de intereses: hacer que crezca la República y sea grande su pueblo, en paz y justicia. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Chubut.

Sr. Sigal. — Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical adhiero al homenaje que se rinde al extinto senador nacional don Ramón Lorenzo, hombre de lucha política en mi provincia, con quien nos enfrentamos en las elecciones como adversarios políticos, pero con quien también luchamos a la par junto con el Partido Justicialista y otros partidos políticos para lograr la democracia que hoy tenemos.

Por otra parte, don Ramón, como lo llamábamos nosotros política y cariñosamente, se supo granjear el respeto de todos sus adversarios políticos de la provincia de Chubut.

Por todo ello, señor presidente, nos adherimos al homenaje que la Cámara rinde a este gran demócrata. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Leconte. — Señor presidente: en nombre de los senadores de los partidos provinciales, adhiero al justo homenaje que la Cámara rinde al ex senador Lorenzo, a quien con tanta precisión y claridad se han referido los oradores proopinantes. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Otero). — Con las palabras de los señores senadores queda rendido el homenaje al ex senador Ramón Lorenzo.

6

REMUNERACIONES DEL PODER JUDICIAL Y AUTARQUIA DE DICHO PODER

Sr. Presidente (Otero). — Corresponde el tratamiento de los temas que tienen preferencia para esta sesión.

En primer lugar, será considerado el proyecto de ley en revisión sobre autarquía del Poder Judicial.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Macris). — (*Lee*):

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social e Inte-

rior y Justicia han considerado el proyecto de ley enviado en revisión por la Cámara de Diputados, por el que se delega en la Corte Suprema de Justicia y en el Poder Ejecutivo nacional la facultad de fijar sus remuneraciones y las de quienes presten servicios en sus respectivas áreas y por las razones que dará el miembro informante os aconsejan su aprobación.

De acuerdo con los términos del artículo 102 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Déjase sin efecto, para la fijación de las remuneraciones de los funcionarios no pertenecientes al Poder Judicial de la Nación, toda vinculación mediante coeficientes, índices u otro tipo de referencias con las retribuciones que perciben los magistrados judiciales de la Nación. En su reemplazo, tal vinculación quedará establecida con el sueldo del presidente de la Nación —excluidos los gastos de representación— manteniéndose las relaciones porcentuales existentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, que estuvieran referidas directa o indirectamente al juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Art. 2º — Lo dispuesto en el artículo 1º también será aplicable a la determinación de haberes jubilatorios, retiros y pensiones que correspondan a funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo nacional, quedando modificadas, a ese solo efecto, las normas que las prevén y los artículos 1º, 2º y 5º de la ley 21.540.

Art. 3º — Facúltase a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la promulgación del presupuesto general de la Nación correspondiente al ejercicio 1986, a fijar la remuneración total de sus miembros. Esta remuneración no podrá exceder, en el mes de abril del año en curso, la cantidad de pesos argentinos cuatrocientos treinta mil (\$a 430.000).

Con la misma limitación temporal, se faculta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a establecer adicionalmente, para los magistrados y/o funcionarios y/o empleados, una compensación funcional, la cual no podrá superar el 25 % (veinticinco por ciento) de la remuneración total sujeta a aportes correspondientes a su categoría y no será computada a los fines de la aplicación de las escalas porcentuales de la ley de facto 22.969.

Art. 4º — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, hasta la promulgación del presupuesto general de la Nación correspondiente al ejercicio 1986, a determinar la remuneración correspondiente al presidente de la Nación.

Art. 5º — Derógase el primer párrafo del artículo 57 de la ley 23.110 a partir de la fecha en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haga uso de la facultad que se le delega en el artículo 3º de la presente ley.

Art. 6º — Esta ley se aplicará a partir del mes de su sanción y en ningún caso implicará un rebaja nominal en las remuneraciones del personal a que se refiere.

Art. 7º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de las comisiones, abril 11 de 1985.

Juan Trilla. — Fernando de la Rúa. — Oraldo N. Britos. — Celestino A. Marini. — Luis Brasesco. — Héctor J. Velázquez. — Horacio F. Bravo Herrero. — Antonio T. Berhongaray. — Francisco R. Villada. — Eduardo Menem. — Deolindo F. Bittel. — Ricardo G. Leconte. — Alberto J. Rodríguez Sad. — Edgardo P. V. Murguía. — Fernando H. Mauhum.

ANTECEDENTES

I

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1984.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Déjase sin efecto para la fijación de las remuneraciones de los funcionarios no pertenecientes al Poder Judicial de la Nación, a partir del 1º de octubre de 1984, toda vinculación mediante coeficientes, índices u otro tipo de referencia con las retribuciones que perciben los magistrados judiciales de la Nación, en su reemplazo, tal vinculación quedará establecida con la remuneración del presidente de la Nación, manteniéndose las relaciones porcentuales existentes que, a la fecha mencionada precedentemente, se encontraban referidas directa o indirectamente al Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Art. 2º — Lo dispuesto en el artículo 1º será aplicable a la determinación de haberes jubilatorios, retiros y pensiones que correspondan a funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo nacional quedando modificadas a ese solo efecto las normas que las prevén y los artículo 1º, 2º y 5º de la ley 21.540.

Art. 3º — Facúltase transitoriamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fijar la remuneración mensual total de sus miembros y al Poder Ejecutivo nacional a determinar la correspondiente al presidente de la Nación, a partir del 1º de octubre de 1984 y hasta la promulgación del presupuesto general de la Nación correspondiente al ejercicio 1986.

Art. 4º — Sustitúyense las planillas anexas a la ley 22.969 por las que se anexan a la presente ley de la que forman parte integrante.

Art. 5º — Derógase el primer párrafo del artículo 57 de la ley 23.110, a partir de la fecha en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haga uso de la facultad que se le delega en el artículo 3º.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ROBERTO P. SILVA.
Carlos A. Bravo.

ANEXO

NOMENCLADOR DE FUNCIONES Y PORCENTAJES JUSTICIA NACIONAL

Personal administrativo y técnico

	%
Prosecretario jefe de segunda	50,50
Jefe de departamento	49,50
Jefe contador de la cámara comercial	47,
Segundo jefe de departamento	47,
Oficial superior	41,50
Prosecretario administrativo	41,50
Jefe de despacho de primera	41,50
Oficial superior de primera	41,50
Oficial superior de segunda	41
Oficial superior de tercera	40,50
Oficial superior de cuarta	40
Oficial superior de quinta	39,50
Oficial superior de sexta	38
Jefe de despacho de segunda	38
Oficial superior de séptima	36,50
Oficial superior de octava	33
Oficial superior de novena	32
Auxiliar superior	31
Auxiliar superior de primera	29,50
Auxiliar superior de tercera	28,50
Auxiliar superior de sexta	26
Auxiliar superior de séptima	24,50
Juez de paz	24,50
Auxiliar principal	23
Auxiliar principal de segunda	22
Auxiliar principal de tercera	21
Auxiliar principal de cuarta	20
Auxiliar principal de quinta	19
Auxiliar principal de sexta	18
Auxiliar principal de séptima	17,50
Auxiliar	16
Auxiliar de séptima	14

Personal de obreros, maestranza y servicio

Oficial superior de octava	33
Oficial superior de novena	32,50
Auxiliar superior	30
Auxiliar principal	27,50
Auxiliar principal de primera	26
Auxiliar principal de segunda	24,50
Auxiliar principal de tercera	23
Auxiliar principal de cuarta	20,50
Auxiliar principal de quinta	19,50
Auxiliar principal de sexta	19
Auxiliar principal de séptima	18,50
Auxiliar principal de octava	17,50
Auxiliar principal de novena	17
Auxiliar	16,50
Auxiliar de primera	16
Auxiliar de segunda	15,50
Auxiliar de tercera	14,50
Auxiliar de cuarta	14
Auxiliar de quinta	13,50
Auxiliar de sexta	13
Auxiliar de séptima	12,50

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1984.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El proyecto de ley que se acompaña tiene el propósito de aumentar el margen de independencia del Poder Judicial, ya que propicia delegar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación la facultad de fijar sus propias remuneraciones y las de los demás jueces, así como las de los agentes que se desempeñan en dicho poder.

Asimismo, propone delegar en el Poder Ejecutivo nacional la facultad de fijar su remuneración y la de quienes prestan servicios en su esfera, eliminando de este modo las relaciones que diversas leyes han establecido entre las remuneraciones de los jueces y ciertos agentes administrativos.

Esas relaciones carecen de fundamento lógico, ya que no tienen en cuenta la índole de las tareas judiciales y la de aquellos cuyas remuneraciones se hicieron depender de las de los jueces, distorsionando la política salarial del sector público y produciendo injustificables anomalías.

La delegación que se propicia tiene carácter temporario, y se funda en la necesidad de corregir de modo frecuente el monto de las remuneraciones para compensar, en la medida de lo posible, la depreciación del valor de la moneda.

Mediante el sistema que establece el proyecto adjunto, todas las vinculaciones que la legislación vigente establece de modo directo o indirecto entre la remuneración de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y agentes administrativos quedarán establecidas con relación a la que perciba el presidente de la Nación.

Con respecto a los empleados y funcionarios del Poder Judicial se mantiene la vinculación existente, pero se modifican sus coeficientes, a fin de que este proyecto no implique la alteración de sus actuales niveles salariales.

Como consecuencia de las nuevas vinculaciones que se propician, deben modificarse también las normas que establecen haberes de jubilación, retiro, pensión y asignaciones mensuales vitalicias, para que guarden coherencia con las remuneraciones que percibirán quienes se encuentran en actividad.

Finalmente, y en atención a razones de política remunerativa, se propicia que las nuevas normas rijan desde el 1º de octubre de 1984.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

RAÚL R. ALFONSÍN

Carlos R. S. Alconada Aramburú. — Bernardo Grinspun.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Déjase sin efecto para la fijación de las remuneraciones de los funcionarios no pertenecientes al

Poder Judicial de la Nación, a partir del 1º de octubre de 1984, toda vinculación mediante coeficientes, índices u otro tipo de referencia con las retribuciones que perciben los magistrados judiciales de la Nación; en su reemplazo, tal vinculación quedará establecida con la remuneración del presidente de la Nación, manteniéndose las relaciones porcentuales existentes que, a la fecha mencionada precedentemente, se encontraban referidas directa o indirectamente al juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Art. 2º — Lo dispuesto en el artículo 1º será aplicable a la determinación de haberes jubilatorios, retiros y pensiones que correspondan a funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo nacional quedando modificadas a ese solo efecto las normas que las prevén y los artículos 1º, 2º y 5º de la ley 21.540.

Art. 3º — Facúltase transitoriamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fijar la remuneración mensual total de sus miembros y al Poder Ejecutivo nacional a determinar la correspondiente al presidente de la Nación, a partir del 1º de octubre de 1984 y hasta la promulgación del presupuesto general de la Nación correspondiente al ejercicio 1986.

Art. 4º — Sustitúyense las planillas anexas a la ley 22.969 por las que se anexan a la presente ley, de la que forman parte integrante.

Art. 5º — Derógase el primer párrafo del artículo 57 de la ley 23.110, a partir de la fecha en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haga uso de la facultad que se le delega en el artículo 3º.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANEXO

NOMENCLADOR DE FUNCIONES Y PORCENTAJES
JUSTICIA NACIONAL*Personal administrativo y técnico*

	%
Prosecretario jefe de 2ª	50,50
Jefe de departamento	49,50
Jefe contador de la cámara comercial	47
2º jefe de departamento	47
Oficial superior	41,50
Prosecretario administrativo	41,50
Jefe de despacho de 1ª	41,50
Oficial superior de 1ª	41,50
Oficial superior de 2ª	41
Oficial superior de 3ª	40,50
Oficial superior de 4ª	40
Oficial superior de 5ª	39,50
Oficial superior de 6ª	38
Jefe de despacho de 2ª	38
Oficial superior de 7ª	36,50
Oficial superior de 8ª	33
Oficial superior de 9ª	32
Auxiliar superior	31
Auxiliar superior de 1ª	29,50
Auxiliar superior de 3ª	28,50
Auxiliar superior de 6ª	26

	%
Auxiliar superior de 7ª	24,50
Juez de paz	24,50
Auxiliar principal	23
Auxiliar principal de 2ª	22
Auxiliar principal de 3ª	21
Auxiliar principal de 4ª	20
Auxiliar principal de 5ª	19
Auxiliar principal de 6ª	18
Auxiliar principal de 7ª	17,50
Auxiliar	16
Auxiliar de 7ª	14

Personal de obrero, maestranza y servicio

Oficial superior de 8ª	33
Oficial superior de 9ª	32,50
Auxiliar superior	30
Auxiliar principal	27,50
Auxiliar principal de 1ª	26
Auxiliar principal de 2ª	24,50
Auxiliar principal de 3ª	23
Auxiliar principal de 4ª	20,50
Auxiliar principal de 5ª	19,50
Auxiliar principal de 6ª	19
Auxiliar principal de 7ª	18,50
Auxiliar principal de 8ª	17,50
Auxiliar principal de 9ª	17
Auxiliar	16,50
Auxiliar de 1ª	16
Auxiliar de 2ª	15,50
Auxiliar de 3ª	14,50
Auxiliar de 4ª	14
Auxiliar de 5ª	13,50
Auxiliar de 6ª	13
Auxiliar de 7ª	12,50

Sr. Presidente (Otero). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Berhongeray. — Como el cuerpo ha sido citado para esta sesión a los efectos de tratar, entre otros temas, el proyecto de ley en revisión sobre la autarquía del Poder Judicial, quiero expresar brevemente los fundamentos de algunas modificaciones que, dentro del espíritu original, han sido introducidas por unanimidad de todos los bloques que integran este cuerpo.

El proyecto que estamos considerando tiene por objeto, como lo dice el mensaje del Poder Ejecutivo, aumentar la independencia del Poder Judicial. Esa es la idea central. Queremos que el Poder Judicial actúe en la República con la mayor independencia posible. Uno de los elementos que pueden llegar a limitarla es el hecho de que las retribuciones de los agentes del Poder Judicial están condicionadas a ciertos factores que podrían causar distorsiones. Es por ello que el Poder Ejecutivo ha creído necesario

realizar, como un acto de justicia, lo que se ha denominado "desenganche horizontal".

A partir de la sanción de este proyecto —que no dudamos encontrará su confirmación cuando sea analizado nuevamente en Diputados— las retribuciones del Poder Judicial serán determinadas por la Corte Suprema de Justicia por expresa delegación del Congreso de la Nación. Nadie duda de que es facultad del Congreso determinar la remuneración de todos los agentes del Estado a través de la Ley de Presupuesto; están incluidos también los agentes del Poder Judicial. Pero creemos que avanzamos en esta idea tendiente a la independencia de dicho Poder efectuando esta delegación transitoria —porque rige hasta al presupuesto de 1986— de modo tal que sea la propia Corte Suprema la que determine los haberes y las remuneraciones del total de los integrantes del Poder Judicial.

En el proyecto del Poder Ejecutivo había un artículo que fue unánimemente sancionado por la Cámara de Diputados y que mereció reparo por parte de algunos sectores del quehacer nacional. Me refiero al artículo 4º.

Por necesidades coyunturales, teniendo en cuenta la transitoriedad de esta ley y dada la grave emergencia por la que atraviesa el país —emergencia en la cual la menor dosis de culpa la tiene el gobierno del presidente Alfonsín— se había establecido una reducción de los porcentuales históricos que tenían los empleados judiciales. La ley que fijó los porcentuales obedeció a la iniciativa de un grande que ya está incorporado a la historia argentina, don Arturo Umberto Illia, y llevó el número 16.494.

Comprendemos las motivaciones de emergencia económica que llevaron al Ejecutivo y a la Cámara de Diputados a realizar estas reducciones. Pero también comprendemos las largas luchas y la justa conquista social que aquello significaba para el gremio de los empleados judiciales. Tuvimos muchas horas de conversación con los representantes de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación de la Capital Federal y de la Federación Judicial Argentina. Con toda lealtad pusimos sobre la mesa de conversaciones los condicionamientos que la realidad económica trae aparejados a la solución de los legítimos intereses de los diversos sectores de la comunidad argentina.

Sabemos que el país está empobrecido pero también sabemos que los reclamos son justos. Estos elementos condicionantes —la justicia de los reclamos y la emergencia económica que estamos viviendo— fueron puestos sobre la mesa y analizados con toda lealtad, para tratar de

buscar juntos la solución que permita conciliar esas dos realidades apuntadas.

Es deseo unánime de los integrantes de todos los bloques de este cuerpo mantener la conquista social representada por los porcentajes históricos de "enganche" y, por ello, creímos que la derogación del artículo 4º del proyecto coadyuvaba a la solución del problema.

Así surgió desde el inicio el método de trabajo comentado, es decir, derogar el artículo 4º del proyecto; sin embargo, también hemos considerado la emergencia económica que vive el país. Fue así que introdujimos algunas variantes, de modo tal que, respetando esa conquista social, pudiéramos crear la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia —quien a partir de ahora fijará las remuneraciones del Poder Judicial— estableciera un "plus", un adicional, para los magistrados, funcionarios judiciales y empleados, de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

Somos conscientes de que hay muchos sectores, yo diría la inmensa mayoría, de la Administración central y descentralizada que cobran un adicional por título; sin embargo, ese "plus" no es cobrado por los magistrados y funcionarios judiciales. Alguien dirá que el título de abogado es inherente a la función judicial y es cierto que lo es. Pero también es cierto que el título de médico es inherente al cargo de director de hospital o de médico forense, como también lo es el de abogado para quien sea director de asuntos jurídicos, por ejemplo. Así, podríamos seguir con la enumeración de casos semejantes de la Administración central o descentralizada, en los que se abona el adicional comentado.

Por ello hemos establecido la posibilidad de un adicional por compensación funcional de hasta un 25 por ciento. No significa que necesariamente deba llegarse al 25 por ciento; ello dependerá de la Corte Suprema, de acuerdo con su único criterio, quien podrá determinar cuáles son los porcentajes que acordará o no a las distintas categorías de magistrados y/o funcionarios y/o empleados judiciales, en concepto de dicho adicional.

También hemos establecido que tal adicional carece de relación con el llamado "enganche" y que no necesariamente deba ser igual para todos. Es decir, el adicional no tiene relación con los porcentajes que antes fueron fijados por la ley 22.969. Así, somos coherentes con lo indicado por el artículo 2º de esa ley, que establece expresamente que todos los adicionales quedan excluidos de las escalas de porcentajes.

También hemos estipulado una remuneración para los miembros de la Corte que, al mes de abril de este año, no podrá superar la suma de 430 mil pesos argentinos. Esta no es una cifra antojadiza; obedece a un análisis que hemos realizado tratando de actualizar los valores —no es lo mismo que indexar— que en carácter de remuneración percibían los magistrados en el mes de marzo de 1976. Es decir, las remuneraciones que cobraban los magistrados de la Constitución, establecidas por el gobierno constitucional, con intervención del Congreso de la Nación. Alguien pensó en algún momento en tomar otras fechas de actualizaciones; nosotros estimamos que no eran correctas.

Así, hemos llegado a esta suma de 430.000 pesos, pero queremos ser absolutamente claros: en nuestro proyecto no hacemos referencia a ningún sistema de indexación.

No compartimos el criterio que se ha sustentado en algún foro en el sentido de que el artículo 96 de la Constitución, cuando señala que no se pueden rebajar las retribuciones de los jueces, implica una indexación automática de las remuneraciones de los magistrados.

Obviamente, cuando se sancionó nuestra Constitución no existía el tema de la inflación y, por lo tanto, de ninguna manera nuestros constituyentes pudieron pensar en ello. Sí estaban pensando —como lo señala Joaquín V. González en su *Manual de derecho constitucional*— en la posibilidad de que el Poder Legislativo, el poder político, mediante la limitación de los recursos en las remuneraciones de los magistrados, pudiera llegar a presionarlos políticamente. Esta es la norma que dio impulso al principio vigente en el artículo 96 de nuestra Constitución.

Pero la actualización por inflación evidentemente no existía y no pudo ser la motivación del mencionado artículo porque no es un modo de persecución, ya que la inflación la padecemos todos los argentinos y, por supuesto, también los magistrados y los integrantes del Poder Judicial.

En este sentido deseo destacar que la Corte Suprema de los Estados Unidos, al analizar la norma similar al artículo 96 que contiene la Constitución americana en el caso "Evans contra Gore", estableció que "asignar a la regla sobre la intangibilidad de las remuneraciones judiciales el sentido de excluir a los magistrados de los gravámenes que afectan parejamente a los habitantes equivale a trivializar el sentido de la garantía", y agregaba que "los jueces no

se encuentran libres de llevar su parte en el costo de las instituciones de las cuales depende también su bienestar". Este caso estaba referido a una acción judicial que existió entonces para liberar a los magistrados del impuesto a las rentas, y en este sentido el tribunal superior de los Estados Unidos fue muy claro al establecer que no puede ser considerado como un beneficio o un privilegio con relación al resto de los habitantes que se encuentran también con obligaciones similares.

Creemos que este fallo se aplica perfectamente a la interpretación que estamos estableciendo sobre el artículo 96 de nuestra Constitución Nacional.

Pero a mayor abundamiento sobre la tesis que estamos tratando sintéticamente de definir, en el sentido de que no existe automaticidad en la indexación de los sueldos de los magistrados por el deterioro inflacionario, nos encontramos ahora con un hecho nuevo: delegamos en la Corte Suprema la facultad de fijar sus propias remuneraciones y entonces, si realizamos esta delegación, mal puede alguien llegar a pensar que el principio del artículo 96 —es decir, el no sometimiento del Poder Judicial al poder político— pueda tener alguna posibilidad de aplicación.

Considero que hemos llegado a este acuerdo unánime por la sensatez y la comprensión de todos los sectores afectados por este tema. Quiero rescatar la lealtad con que todos los bloques integrantes del cuerpo consideraron este problema. También quiero recordar la sensatez con que los empleados judiciales, a través de sus gremios, han comprendido la situación de emergencia que vive la República y que condiciona todas nuestras decisiones. Con esto habremos realizado un aporte más en este momento tan difícil que está viviendo el país, que, por encima de las justas peticiones, está reclamando una mayor dosis de comprensión y de sensatez.

Con estas pocas palabras y en nombre de la Comisión de Presupuesto y Hacienda pido la aprobación de este proyecto que suscriben unánimemente senadores de todos los bloques. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Britos. — Señor presidente: cuando a fines de diciembre entró este proyecto en revisión y nosotros solicitamos que fuera girado a la Comisión de Trabajo y Petición Social, tuvimos casi la seguridad de que los señores diputados habían legislado ligeramente, probablemente por razón de la fecha en que se trataba, ya que no habían contemplado los intereses de los empleados judi-

ciales. Por suerte —tengo que rescatarlo— contamos en esta Cámara con colegas de distintos matices políticos, que cuando las circunstancias son difíciles, más allá de defender sus propias banderías políticas, saben juntarse, discutir y finalmente dar a los dictámenes el significado que deben tener.

Tenemos que ser sinceros. Hasta el día de ayer las cosas no iban tan bien en este Senado, pero felizmente los amigos radicales y de los partidos provinciales estaban preocupados por este tema, ya que los empleados de la justicia nos visitaban en forma permanente y a través de la capacidad de movilización de su gremio nos hicieron sentir el peso natural que tienen los trabajadores cuando defienden sus derechos innegables. (Aplausos.)

Los integrantes del bloque justicialista vivimos hoy una jornada auspiciosa. Cuando hoy al mediodía discutíamos este problema y nuestros colegas consideraron que los propios trabajadores debían participar en las reuniones, realmente me sentí viviendo en un país democrático. Cuando dijimos que el pueblo podía pensar a la par de nosotros y nos dimos cuenta de que agudizando el ingenio ese pueblo era capaz de transmitir mucho más, vimos a los compañeros del sindicato de judiciales de la capital y de la Federación acercarse humildemente para hacernos sugerencias a nosotros, los legisladores nacionales. Así hemos advertido que donde menos pensamos hay alguien que nos puede ilustrar, y en esta emergencia se han destacado los empleados de la justicia.

Por eso quiero adelantar el voto favorable en general del bloque justicialista para este proyecto. Al mismo tiempo anuncio que en particular pediré algunas modificaciones. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — Señor presidente, señores senadores: en mi carácter de vicepresidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social firmé el despacho original, junto con otros compañeros de bancada y senadores justicialistas, para llegar luego de arduas tareas, estudios, trabajos de investigación, coincidencias y desinteligencias, a un acuerdo concertado entre los hombres de los partidos provinciales, del justicialismo y de la Unión Cívica Radical.

Señor presidente: sin lugar a duda el problema de la remuneración del Poder Judicial me ha obligado a meditar respecto de algunos puntos. Indudablemente, encontramos en el Poder Judicial dos tipos de responsabilidad y dos amplios sectores. Uno, está constituido por los emplea-

dos, que son los trabajadores judiciales y, el otro, por los integrantes de dicho Poder: los magistrados.

A los empleados les asiste el derecho constitucional de agremiarse, de sindicalizarse, ejercer el derecho de huelga, peticionar a las autoridades y adoptar medidas directas.

En cambio, a los magistrados judiciales les asiste el solemne sacrificio, como integrantes del gobierno —pues la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los jueces lo integran y forman—, de actuar con ponderación, con juicio y respeto a las instituciones. La función judicial les impone el deber de transitar por el camino de la República, llevando una cruz como la que llevó Cristo, en silencio. (*Aplausos en las galerías.*)

La magistratura no puede, señor presidente —y esto lo digo con el más alto respeto que merece la República a la que sirvo—, hacer acuartelamiento simbólico en sus despachos, porque esto constituye un verdadero acto de sedición ya que ellos integran el poder. (*Aplausos en las galerías.*)

El hecho que estoy narrando —y lo digo con la serenidad necesaria que el tema requiere— obliga a meditar. El Poder Judicial debe tener una remuneración justa, y cuánto más alta mejor, porque la calidad y solvencia económica le dará independencia y lustre. Pero para ello existe la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en contacto con los otros poderes del Estado y como partícipe inclusive de la confección del presupuesto del Poder Judicial, tiene el inexorable deber de discutir las remuneraciones. Pero no puede jamás un magistrado alzarse, protestar, ejercer un derecho de acción directa como fue la que vimos el otro día. Sí, el magistrado tiene el deber inexorable de resistir el oprobio cuando aparecen las fuerzas militares para derrocar la Constitución y la ley. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

Señor presidente: no vi —y lo digo con dolor— cuando cayó el último gobierno constitucional, ni cuando cayó el gobierno del doctor Illia, ni cuando cayó el gobierno de Yrigoyen o el de Perón en el 55, negarse ningún juez a jurar por los estatutos revolucionarios. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

Este es, señor presidente, el derecho que asiste a todos los integrantes de los poderes del Estado: a los del Poder Ejecutivo, a los legisladores que integramos el Congreso y a los miem-

bros de la Corte Suprema de Justicia y jueces de los tribunales inferiores. En cuanto a defender la legitimidad del poder y el funcionamiento pleno de la Constitución y sus instituciones, sí tenemos que ponernos firmes, con el puño cerrado, haciéndolo en los lugares en donde se ejercen las funciones: donde se imparte la justicia, donde se legisla o donde se administra; que se nos saque con un fusil sobre la sien.

Pero acá estamos discutiendo el aspecto salarial, el mismo que se discutía cuando en la República se movían intereses oscuros, con noticias en los diarios, mitad ciertas y mitad mentirosas, creando sensibilidades psicológicas para perturbar la tranquilidad del pueblo. Y en ese ambiente tuvimos que abocarnos al estudio de un tema tan delicado como es la remuneración judicial.

Hablamos con empleados judiciales, con dirigentes de organizaciones sindicales, con miembros de la magistratura, en reuniones largas en que participamos todos los integrantes de la comisión. Hablamos con funcionarios del Poder Ejecutivo. Hubo comprensiones e incomprensiones, lógicas cuando se discuten intereses. Existía un punto fundamental: el artículo 4º de la sanción de la Cámara de Diputados. Por él se mantenía lo que se denomina el "enganche" vertical y se dejaba sin efecto lo que se denomina "enganche" horizontal, disminuyéndose los coeficientes de "enganche" consagrados en las planillas anexas de la ley 22.969.

Era lógico que los empleados judiciales adujeran el derecho adquirido frente a una disminución de sus remuneraciones. También era lógico que, frente a todas las argumentaciones que se hacían para mantener este artículo 4º, se fueran despejando de a poco todos los inconvenientes y todos los elementos basados en aparentes o no aparentes injusticias de las remuneraciones.

Uno de los hechos más salientes que obligó a una discusión y a una meditación profunda fueron los planteos que se hacían en el sentido de que los empleados de más alta jerarquía y antigüedad gozaban de mejor remuneración que los hombres de la magistratura o funcionarios judiciales que recién iniciaban su carrera judicial.

Eso no nos podía sorprender porque se trataba de un hecho ya viejo, no solamente en la Argentina sino en otros países del mundo. Las remuneraciones en las fuerzas armadas, en donde los suboficiales de más alta graduación por su antigüedad y jerarquía reciben un haber

superior al de los egresados del Colegio Militar, subtenientes, tenientes y tenientes primeros, constituyen uno de los ejemplos típicos y clásicos en la Argentina.

Pero, indudablemente, ése fue uno de los motivos fundamentales que más tiempo nos insuñó para poder llegar a buen puerto.

Justamente ayer mantuvimos con el señor senador Berhongaray y con el señor secretario de la Función Pública del Poder Ejecutivo, licenciado Roulet, una larga entrevista en donde se evaluaron muchísimas circunstancias de distinto orden, todos los planteos formulados por los magistrados y funcionarios judiciales y por los empleados de la justicia, a través de las organizaciones gremiales. Se analizó la situación frente a una economía en crisis que se vive en el país y frente al respeto de las jerarquías de las remuneraciones que debe tener el Poder Judicial, no solamente en el ámbito de la magistratura, sino también en el de sus trabajadores.

Así se fueron transitando caminos en los que a veces se presentaban contradicciones que llevaban a situaciones que parecían insalvables. Pero los hombres que se empeñan en buscar soluciones, señor presidente y señores senadores, los hombres que dejan a un lado las banderías políticas y piden un esfuerzo titánico a todos para conciliar intereses y encontrar la gran avenida de las soluciones, tuvieron su éxito.

Precisamente hoy le comentaba a uno de mis amigos senadores que, indudablemente, estuvo la mano de Dios ayudándonos y no la cola del diablo perjudicándonos. Así, esos mismos trabajadores judiciales que se encolumnaron por la calle ejerciendo el derecho constitucional que esta República que todos integramos nos garantiza, esos mismos hombres que venían cantando sus *slogans* democráticamente, como se ejerce el derecho dentro de la Constitución y de la ley, subieron las escalinatas del Senado, se sentaron con los representantes de las provincias, junto con los senadores de los distintos bloques y se evaluaron las circunstancias presupuestarias; se discutió profundamente y se habló con gran lealtad y sinceridad sobre lo que ocurre en todo el país. Finalmente se llegó a un texto en el que todos coincidimos: los empleados judiciales, a través de sus organizaciones gremiales, y los presidentes de bloques llegaron a una conclusión feliz. Así se obtuvo el despacho, cuando estaba lejos de producirse para hoy. Entonces, en momentos en que los empleados judiciales iniciaban la marcha hacia el Congreso, posiblemente no pensaron en que cuando volvieran ya habría un dictamen.

Y esto nos da un ejemplo, señores: no debemos vivir más de la añoranza de los tiempos pasados, sino que tenemos que trabajar tenazmente para fortalecer la esperanza con vistas a construir un futuro mejor.

Así, hoy el Senado tiene este despacho que se produce, señor presidente, en nombre de una democracia que se debate ferozmente por perfeccionarse, con la humildad de lo que se realiza con sacrificio, con un alto sentido de unidad nacional y con un profundo sentimiento de reconciliación de los intereses sectoriales en pugna; se produce porque la dirigencia sindical actuó con la responsabilidad de la hora, porque los distintos sectores políticos pensaron en la Nación y en la vigencia plena de los derechos del hombre, a quien la democracia protege.

Hoy, señor presidente, la Corte Suprema de Justicia tendrá la autarquía que tanto quiso y añoró. Podrá empezar a ejercer su derecho de fijar las remuneraciones. Quedará plasmado para siempre que no habrá poder político que coarte una mejor remuneración a la justicia, porque será la propia Corte Suprema quien fijará, dentro de las partidas presupuestarias, los sueldos, los adicionales, los porcentajes correspondientes a la magistratura y a los trabajadores judiciales.

Hoy el Senado de la Nación cumple con un deber patriótico, y llama a la reflexión prudente y silenciosa a todos aquellos que integran los poderes del Estado, para que cuando la remuneración, como en el caso de los magistrados, sea insuficiente, se defienda dentro de los canales normales, para que los hombres prudentes y probos que deben administrar justicia y asegurar el debido proceso cumplan con su cometido y no se marginen de la ley brindando espectáculos que no son edificantes para la democracia ni buenos ejemplos para el hombre humilde, el hombre de la calle que le pide que se haga justicia a un magistrado que se encerró. *(Aplausos prolongados en las galerías.)*

Para terminar, señor presidente, quiero expresar un anhelo: que los hombres a quienes la Constitución les brinda el derecho de asociarse, de sindicalizarse, de peticionar a las autoridades y de huelga, conforme al artículo 14, ejerzan esos derechos cuantas veces lo tengan que hacer y con la responsabilidad con que lo han hecho hasta ahora. También espero que quienes ejercen el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial lo hagan con la prudencia, la bonhomía y la jerarquía de la democracia, que de una vez por todas aprendamos a querernos más y a olvidar nuestros odios y los falsos oropeles.

Que todos, en sus jerarquías y sus funciones, hagamos lo que hoy hacemos nosotros aquí: trabajar afanosamente por la paz, la armonía y el progreso de nuestra querida República. (*Aplausos prolongados en las bancas y en las galerías. Varios señores senadores rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. Bittel. — Señor presidente: como ya lo anticipara el presidente de nuestro bloque, el justicialismo va a apoyar en general el proyecto, y ya lo ha manifestado con meridiana claridad.

No quiero ser quien meta la cola del diablo, como dijo el señor senador Brasesco; deseo que el tema esté presidido por la presencia omnipotente de Dios en esta difícil etapa que vive nuestro país. Quiero apelar a Dios para que la cordura que muestra el Senado de la Nación en el tratamiento de leyes fundamentales, no se quiebre por nada del mundo, porque de nuestra conducta y forma de resolver los diferendos entre los argentinos, depende el destino de las instituciones republicanas.

Considero que todo proyecto de ley es perfectible, incluso la ley es perfectible. No quiero introducir la discordia; simplemente deseo anticipar que vamos a proponer, durante el tratamiento en particular, algunos agregados a los artículos 3º y 4º. Por mi parte, también voy a proponer, con el apoyo de mi bloque, un artículo que quedaría como 7º.

Nadie puede ignorar que la aplicación de esta ley, que nosotros consideramos de estricta justicia, va a tener implicancias en los presupuestos provinciales. Como representantes de los estados federales argentinos, debemos tomar algunas previsiones, conscientes de la difícil situación por que atraviesan casi todas las provincias argentinas en lo que se refiere a sus presupuestos. Por eso, cuando tratemos el proyecto en particular, vamos a proponer algunas modificaciones y la inclusión de un artículo que pretende cubrir a nuestras provincias, que van a sufrir el impacto de estas mejoras que, con justicia, el Senado de la Nación va a votar esta noche en favor de los jueces y de los empleados de la justicia.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

Sr. Marini. — Señor presidente: voy a hacer uso de la palabra brevemente, en mi calidad de presidente de la Comisión de Interior y Justicia

de este Honorable Senado, con la finalidad de agregar algunos conceptos que justifican nuestra firma en el dictamen de la comisión y de adelantar nuestra opinión favorable a la aprobación de este proyecto de ley.

La comisión que presidí tuvo, durante todo el proceso de discusión de este proyecto, la principal preocupación de que no se introdujera en el texto del mismo ni se consagrara legislativamente, aun sin querer, una política que, desgraciadamente, caracterizó en otras etapas institucionales de nuestro país a los regímenes de fuerza y dictatoriales que introducían, por estos medios, factores de división donde debía haber real unidad como, por ejemplo, entre los hombres de trabajo.

Digo esto porque para el justicialismo, tan trabajador es el presidente de la Corte Suprema de Justicia como el último oficial del Poder Judicial, aunque sea el más modesto de sus servidores. Creemos que ambos deben gozar de la misma dignidad y ser tratados con la misma justicia.

Por eso nuestra comisión, desde el mismo momento en que tuvo conocimiento del proyecto originario, se opuso a su redacción porque se disminuían los porcentajes de participación a que tenían derecho los trabajadores judiciales en los aumentos que se les fueron concediendo a los integrantes de la Corte Suprema.

Por eso luché permanentemente para que esto no sucediera y felizmente ahora podemos señalar con alegría que con una unidad que honra a este Parlamento se ha llegado a una solución que contempla los dos objetivos perseguidos: dar un marco de dignidad a las remuneraciones de los señores jueces y lograr que no sean ajenos a él los trabajadores judiciales.

Se llegó así al artículo 3º del proyecto, en el cual se aumentan las remuneraciones de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, pero al mismo tiempo se establece que ellos tendrán la obligación de aumentar hasta un 25 por ciento las remuneraciones de los compañeros trabajadores judiciales.

De esta manera se salva un principio fundamental que es la unidad y solidaridad de aquellos que trabajan, uno de los objetivos que persigue nuestra doctrina. Además hemos puesto en práctica un aspecto que es necesario que todos efectivemos en toda circunstancia en que esté en juego el interés institucional de la República. Se trata de actuar colocando por encima de todo los intereses de la Nación, con unidad de argentinos y poniendo nuestro corazón en la solución de nuestros problemas.

Este proyecto de ley, que Dios quiera sea hoy sancionado aquí y aprobado luego por la Cámara de Diputados, es la expresión concreta de ese espíritu. Estamos seguros, porque escuchamos a las partes y por los aplausos de la barra, de que con este proyecto estamos dando una justa solución a un problema grave que tiene el país. Este Senado ha tenido la inteligencia, la habilidad y la suerte de encontrar una solución adecuada. (*Aplausos en las galerías.*)

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Leconte. — Señor presidente: en apretada síntesis quiero fundar nuestra adhesión a este despacho que suscribimos unánimamente interpretando el sentir de este cuerpo en una precisa coincidencia con los trabajadores judiciales del país.

La tarea que hoy aquí se completa ha sido y es seria. Tiene como objetivo asegurar la independencia del Poder Judicial, dándole a la Corte Suprema facultades mayores, que si bien no brindan la autarquía plena, que es un real objetivo que anhelamos cumplir, le permite desprenderse al Poder Judicial de ese “enganche horizontal” que trababa un crecimiento mayor de las remuneraciones que merecían sus integrantes.

El objetivo es jerarquizar la justicia dando a los jueces sueldos decorosos que les permitan ser independientes de todo tipo de presión para ejercer el alto mandato de dar a cada uno lo suyo. Al mismo tiempo pretendemos establecer, en un pie de igualdad, una retribución justa para los funcionarios y empleados judiciales, integrados en un idéntico quehacer y de gran importancia en la tarea de hacer justicia trabajosamente todos los días.

Hemos logrado todo ello en una síntesis en que se volcó imaginación y una madurez que debemos exhibir como ejemplar, tanto por parte de los senadores, que por encima de diferencias buscaron la mejor solución, como de los representantes sindicales que afrontaban horas de lucha y que supieron serenar sus espíritus para meditar en una solución que, si bien no es la ideal, significa un avance y la consolidación de una legítima aspiración a la que tienen derecho.

En esta materia dijimos hoy —y conviene repetirlo ahora—, que nos interesa hacer justicia con los magistrados, funcionarios y empleados judiciales federales. Pero también debemos decir —si queremos respetar plenamente el valor de la Justicia— que es necesario lograr la con-

creción de ese ideal para lo magistrados, funcionarios y empleados judiciales provinciales, pues ellos también tienen el derecho de ganar lo mismo, o algo parecido, por una tarea que es igual o a veces más engorrosa, por razones de competencia. Los empleados judiciales que están aquí y los abogados que integran este cuerpo saben bien el alcance y la dimensión de lo que estoy señalando.

Hay provincias en las cuales los empleados judiciales no ganan lo mismo que los empleados de la Justicia Federal. Sus sueldos se aproximan pero se rigen por un “enganche” de hecho, o a veces legal.

Lo que hoy votamos con honda convicción queremos que llegue también a los magistrados, funcionarios y empleados judiciales de las provincias. Pero debemos preguntarnos con qué recursos se podrán afrontar tales gastos. Nosotros estamos sancionando una ley para hacer justicia con los empleados judiciales federales, pero debemos tener en cuenta de dónde habrán de provenir los recursos necesarios para que los empleados judiciales provinciales puedan disfrutar del mismo derecho y para que la justicia pueda escribirse con mayúscula en todos los poderes judiciales de la República Argentina. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

En esta materia no he querido plantear iniciativa alguna para esta oportunidad, con la intención de no perturbar la marcha de la solución que todos anhelamos. Pero quiero decir con énfasis que los mayores recursos que habrán de necesitar las provincias para el “enganche” de sus magistrados, funcionarios y empleados judiciales, con el objeto de que disfruten de idénticos aumentos, deberán salir de mayores aportes de la Nación a las provincias cuando sancionemos el régimen de coparticipación federal de impuestos. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

Por ello declaro —estimo que quienes represento comparten esta posición— que en ocasión de tratarse el régimen de coparticipación federal, que habrá de considerarse indefectiblemente antes del presupuesto de la Nación, volveremos a plantear esta cuestión porque, de lo contrario, no habremos de considerar ese asunto bajo ninguna circunstancia pues no queremos que en la República Argentina haya hijos y entenados. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

Queremos que el ideal de justicia se realice en plenitud en todos los rincones de las provincias, sin diferencias, y con la ejemplar convicción de que cuando queremos hacer justicia nos olvidamos de las discrepancias que seguimos te-

niendo y de los antecedentes que nos separan y nos acordamos de las esperanzas que nos unen y de la responsabilidad para trabajar en común al servicio de nuestro pueblo. (*Aplausos en las bancas y en las galerías. Varios señores senadores rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Amoedo. — Entro a este emotivo debate en el que se va a plasmar una justa aspiración de un gremio respetable, auxiliar de la Justicia, de la Constitución, anticipando mi voto favorable al proyecto en general y, a título personal —no del bloque que integro—, formulo mi oposición formal al artículo 4º del proyecto que estamos tratando.

Esa impugnación surge en defensa de los derechos que esta norma otorga a los trabajadores judiciales. El artículo 4º del proyecto de ley en consideración vulnera un principio de la Constitución Nacional y puede hacer perecedera la vigencia de la ley que se reclama con toda justicia.

El artículo 79 de la Constitución Nacional establece claramente que "El presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro de la Nación, que no podrá ser alterado en el período de sus nombramientos". Este artículo fue sancionado por los constituyentes de 1853 en la sesión del 29 de abril de ese año, y a propuesta del convencional Del Carril, se agregó la segunda parte que establece: "Durante el mismo período no podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento de la Nación, ni de provincia alguna". Este artículo fue tomado del artículo II, sección 1ª, cláusula 6, de la constitución americana.

Sin embargo, nuestro artículo 79 tiene una variante con respecto a la disposición de la constitución americana que acabo de citar ya que ésta no incluye la prohibición de alterar los sueldos del vicepresidente de los Estados Unidos.

La Convención de Filadelfia y los constituyentes de Santa Fe adoptaron esta cláusula constitucional, que surge por aplicación del principio de independencia de los poderes, para no permitir que el Parlamento pueda presionar al presidente de la Nación disminuyéndole sus haberes, o tratar de congraciarse con él aumentándolos. Esta es la razón de la prohibición expresa consignada en la Constitución para que no puedan ser aumentados ni disminuidos los sueldos del presidente durante el ejercicio de su mandato.

González Calderón explica el artículo al que me he referido y señala como propósito de los

constituyentes de la Convención de Filadelfia precisamente el de impedir que se variaran los emolumentos de los ciudadanos presidentes de la Nación. Hamilton decía en "El Federalista" que "con esta disposición de la Ley Suprema se impide al Congreso coartar la acción independiente del Ejecutivo dentro de su propia esfera, es decir, se le impide someterlo a una influencia parlamentaria avasalladora. No puede ni debilitar su fortaleza, obrando sobre sus necesidades, ni corromper su integridad apelando a su avaricia. Ni la Unión, ni ninguno de sus miembros, tendrán libertad para darle, ni él la tendrá para recibir, ningún otro emolumento más que el señalado por una primera ley". Y agregaba el convencional informante en la Convención de Filadelfia, que para ello el presidente de los Estados Unidos ganaba un sueldo y además gozaba del privilegio de una mansión, la Casa Blanca, con el pago de todas las necesidades de mantenimiento de la casa y con los gastos de representación que le permitían cumplir con honor su investidura. Estas condiciones también se dan entre nosotros.

Joaquín V. González, ilustre senador riojano, en su *Manual* que constituye casi la Biblia para la interpretación de nuestra Constitución, dice, citando a Story en sus *Comentarios*, "que el Congreso no puede empeorar su condición disminuyendo sus sueldos, o inducirlos a deshonorar su investidura por miseria o ambición de fortuna; porque aunque existan hombres que jamás son doblegados ni vencidos en el sacrificio por sus deberes, también es verdad que esta virtud es la excelencia de pocos espíritus"; y por otra parte, agrega González, "la prohibición es legítima salvo el caso de que los mismos legisladores puedan, por venalidad o complacencias ilegítimas, convertir el empleo del presidente en una fuente de lucro. El Congreso, al fijar en el presupuesto anual los gastos de la Nación, no puede modificar la partida relativa al sueldo del presidente y vicepresidente durante los seis años de su mandato. Por sueldo debe entenderse sólo la cantidad destinada a la remuneración personal y exclusiva del funcionario, y no las sumas necesarias para mantener el decoro o la efectividad de sus funciones: el primero es propiedad privada de la persona, y los segundos son de la Nación y destinados a su servicio".

Señor presidente: el artículo 4º del proyecto que consideramos va más allá de la prohibición constitucional: delega en el presidente de la Nación la facultad de fijarse su propio sueldo. Eso constituye una violación flagrante de las disposiciones constitucionales.

Salvando así mi voto afirmo, con las palabras invocadoras del señor senador por Entre Ríos, que comparto, que no hay nada más importante que defender la vigencia de la Constitución como fuente indiscutible de la democracia argentina. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Berhongaray. — Señor presidente: como miembro informante de la comisión quiero hacer algunas objeciones a la interpretación del señor senador preopinante. No hacerlo implicaría una responsabilidad por omisión de los que hemos asumido la responsabilidad de impulsar este proyecto. Anticipo que a nuestro entender la iniciativa es totalmente adecuada a las normas constitucionales, y por ende absolutamente constitucional.

El artículo 79 citado por el señor senador por Catamarca tiene que ser interpretado, como dijimos al referirnos al 96, de acuerdo con la hermenéutica de las condiciones históricas en las que fuera redactado. Cuando hablamos del artículo 96 dijimos que la inflación era un hecho ignorado en el mundo de esa época. Entonces, mal podría tomarse la actualización de la degradación de los sueldos como una alteración de éstos.

Hemos dicho que debemos tener en cuenta el espíritu del legislador, y tanto en el artículo 79 como en el 96 se buscó que el Congreso de la Nación, a través del manejo de la Ley de Presupuesto, no creara condiciones que sometieran la acción de libre desenvolvimiento de los otros dos poderes.

Por este motivo se dice que no se puede alterar. Joaquín V. González, como bien lo ha citado el señor senador por Catamarca, se refiere a la alteración como una disminución del sueldo del señor presidente.

Sr. Amoedo. — ¿Me permite una breve interrupción, señor senador?

Sr. Berhongaray. — Cómo no.

Sr. Amoedo. — Seguramente no escuchó bien, porque Joaquín V. González habla de la disminución y del aumento. Por eso no me referí a esa parte de su exposición cuando hice alusión al artículo 96. La Constitución Nacional establece expresamente que los sueldos de los miembros de la Corte no pueden ser disminuidos, pero sí aumentados.

Por las razones que acabo de expresar queda demostrado que la cláusula del artículo 79 es distinta a la fijada por el artículo 96.

Sr. Berhongaray. — Debo señalar que el gran tratadista y constitucionalista Joaquín V. González vivió en los tiempos en que se sancionó nuestra Constitución, época en la que no existía la inflación. En consecuencia es lógico que no haya previsto situaciones como las que estamos viviendo en este momento.

Este presupuesto, que Alberdi puntualizó en *Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina*, lógicamente fue recogido por los constitucionalistas de esa época y, obviamente, por Joaquín V. González. La no alteración significa que no puede caprichosamente modificarse el sueldo de los integrantes de los otros poderes, de modo tal de crear un condicionamiento político del Poder Legislativo con el Poder Judicial o el Ejecutivo.

Creo que nos es fácil entender que los artículos de la Constitución deben ser interpretados conforme a las circunstancias que imperaron en el momento en que fueron sancionados. El hecho de ubicarnos en el contexto histórico de la sanción de cada una de estas normas está relacionado con la racionalidad, que es un elemento de análisis de todas las disposiciones constitucionales.

Por lo expuesto —con el debido respeto y aprecio que le tengo al señor senador por Catamarca— no me parece racional ni justo congelar el sueldo de algún trabajador de la República, sea el de su presidente, el de sus jueces, el de quienes van a estar enganchados con el sueldo del presidente o los empleados del Poder Judicial, que estarán enganchados con el sueldo de los jueces.

Entiendo, señor presidente, que la sana interpretación de este artículo no da lugar para otra apreciación. Descarto entonces el ataque de inconstitucionalidad que se acaba de realizar a título personal. Por el contrario pienso que es plenamente constitucional. Por otra parte, es doctrina uniforme de nuestra Corte y demás tribunales, y de todos los países que han sufrido procesos inflacionarios, que la adecuación, la actualización racional, no significa alteración de las contraprestaciones.

En ese sentido, quiero ratificar la plena constitucionalidad del artículo 4º que hemos presentado por unanimidad, con el auspicio de los integrantes de todos los bloques. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente: a esta altura del debate muy pocas palabras serán suficientes para justificar nuestro voto favorable al proyecto en consideración.

Se trata en rigor de las retribuciones que corresponden a los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial, que son quienes desempeñan principalmente sus tareas en la ciudad de Buenos Aires, en la Capital Federal, nuestro distrito.

Por eso con el senador Trilla desde el primer momento dedicamos principal atención a este problema. Es la justicia nacional, pero es principalmente la justicia de la ciudad de Buenos Aires.

Cuando el 20 de diciembre del año pasado los señores presidentes de los bloques pidieron que este asunto pasara a comisión, no imaginaba el Senado que esto daría lugar a tan afanosos trabajos.

Algunos dijeron que ese pedido de vuelta a comisión significó la demora en el tratamiento de la ley. Creo, señor presidente, que a veces hay demoras saludables cuando ellas llevan a encontrar soluciones justas y completas, y perfeccionar la técnica de las leyes. No es demora lo que es trabajo, análisis y estudio. Hizo posible el diálogo, escuchar razones, analizar los argumentos, profundizar en los textos. Esta no es una ley cualquiera; es la ley que determinará la forma en que la República ha de pagar a sus jueces y a quienes colaboran con ellos. Es la ley para un poder al cual hay que asegurar la independencia y la intangibilidad de las retribuciones para la plena tranquilidad de su desempeño.

Sabemos que los magistrados del Poder Judicial afrontan una situación económica difícil por el reducido monto de las retribuciones que perciben, situación que padecen también los empleados del Poder Judicial. Sé lo que esto significa, señor presidente. Mi padre fue juez por largos años, y he sabido por la experiencia de la vida cotidiana, en el ámbito de la familia, del sufrimiento por las carencias de los magistrados, de la pobreza, la digna pobreza en que vivían desprendidos de la ambición por cosas materiales. Nada les impedía asegurar su dignidad ni la independencia de su juicio, y no les temblaba la mano a aquellos hombres para hacer justicia y preservar la plena vigencia de sus fueros.

Señor presidente: es importante que la República asegure al juez la tranquilidad y la independencia económica, que lo libere de los afanes y las urgencias de esta vida tan compleja de hoy; que el juez pueda estar en su sitial, en su despacho, tranquilo y sereno para la augusta misión de administrar justicia, misión que le está conferida por la Constitución y la ley, en la cual participan también quienes lo asisten. Podría citar a procesalistas famosos, que muestran cómo el proceso se realiza con la colaboración del juez

y de quienes trabajan con él, desde el ordenanza hasta el secretario, desde el empleado hasta quienes lo auxilian en la seguridad y la vigilancia del juzgado. Se trata entonces de resolver integralmente todo el problema de la justicia, que es el del Poder Judicial. Y se ha llegado a esta solución de asignar transitoriamente a la Corte la facultad de fijar los haberes para resolver el problema del necesario ajuste del salario frente al deterioro que sufre nuestra moneda.

Este es el punto principal que examinamos en la Comisión de Asuntos Constitucionales, para concluir en que no se vulneraba el precepto constitucional por la delegación, ya que ésta es transitoria y los fines del proyecto residen en este ajuste necesario. No somos partidarios de delegar las facultades del Congreso, pero esta causa está justificada por la naturaleza de la retribución a que se refiere, por lo transitorio de la norma y por lo imprescindible del ajuste.

Las retribuciones que resultarán de la aplicación de esta norma son indudablemente incrementadas respecto de las que actualmente reciben los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial. Esto debe ser valorado y apreciado como un esfuerzo del país para tener una gran justicia, una justicia independiente y con gran tranquilidad en cuanto a sus retribuciones.

Hubiéramos querido dar más, pero hay distancia entre lo justo y lo posible; debemos recordar que estamos inmersos en una crisis muy difícil, en una grave situación económica que es reflejo del descalabro económico que recibimos del Proceso, con una enorme deuda externa y una inflación galopante. La economía, carcomida por dentro, nos impone a todos un desafío singular y un compromiso de austeridad, de eficiencia y de orden económico para recuperar el país.

Aquí se hace un esfuerzo notable para otorgar a la justicia esto que le corresponde. Pero, señor presidente, hay sectores que están postergados, sectores de trabajadores de los más diversos ámbitos para quienes el salario es insuficiente. Estoy convencido de que los que reciban el beneficio de esta ley sabrán dar el ejemplo al pueblo, que paga su justicia, con una gran justicia; una justicia que sea resguardo seguro de sus derechos y en donde la confianza del pueblo fortalezca el valor de la República en cuanto a la independencia y separación de los poderes. El pueblo debe comprender que esto es necesario para fortalecer las instituciones de la República y la dignidad e independencia de los jueces.

Alguien dijo que el día en que los jueces tengan miedo ningún ciudadano podrá reposar tranquilo. Lo mismo ocurre cuando los jueces se sienten inseguros, intranquilos, con dificultades para afrontar su vida cotidiana y para desenvolverse como sostén de su familia.

Por eso, señor presidente, este proyecto que contempla la situación de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial ha significado para todos nosotros que pusieramos el mayor empeño para llevarlo adelante en el menor tiempo posible con reuniones, con trabajo y estudios realizados para llegar a una solución que dé tranquilidad a los jueces, funcionarios y empleados judiciales. Es así porque, estando ellos tranquilos y seguros, queda resguardada la independencia del Poder Judicial. Podrán ejercer la augusta misión de administrar justicia y los ciudadanos de la República podremos estar tranquilos de que los derechos y garantías estarán custodiados. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Señor presidente: a esta altura del debate podemos decir que ha campeado esta tarde en el recinto la satisfacción de la concordancia y del acuerdo entre todos los señores senadores para aprobar este proyecto que será beneficioso para la justicia, para los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial. Así, votaremos afirmativamente por esta propuesta con la convicción de que estamos haciendo algo bien hecho.

Sin embargo, deseo formular una apreciación de tipo personal que responde a manifestaciones que aquí se han vertido. Aclaro que no lo hago con el ánimo de censurar a mis colegas sino de fijar mis puntos de vista.

Se ha dicho que los magistrados de la Capital han hecho una especie de acuartelamiento, y se ha dejado deslizar una crítica a los jueces en general porque no han sido capaces en otros tiempos de resistir al golpe de Estado.

Creo que esas apreciaciones no pueden quedar sin respuesta en el momento que vivimos. Si estimamos que los jueces han obrado con conducta, el camino que señala la Constitución es el juicio político, y nosotros no podemos anticipar censuras, porque somos los jueces de los jueces. Si alguien estima que un juez merece una sanción porque ha adoptado actitudes contrarias a la normalidad y al prestigio de la función y debe venir ante nosotros para su juzgamiento, no quiero ser yo quien haya prejuzgado. *(Aplausos.)*

Por otra parte, no deseo pasar por alto la circunstancia de que muchos magistrados judiciales han sido confirmados sin que el Poder Ejecutivo de la Nación, que los propuso, haya tenido en cuenta en su momento que no supieron resistir a la opresión y al golpe de Estado. Creemos que se ha trazado una línea sobre ese pasado, y estimo, personalmente, que esa referencia es insólita e inadmisible. Hay magistrados nuevos, designados con nuestro acuerdo, que no han tenido oportunidad de resistir a las circunstancias que aquí se han indicado, y que no podemos declarar, en la global referencia que se ha formulado, comprendidos en ese voto de censura.

Cuando se trató la ley de defensa de la democracia propusimos un texto, que yo me permití sugerir en mi bloque, en el sentido de que cuando se produzca nuevamente —ojalá no sea nunca— una situación de gobierno de facto, los magistrados judiciales que admitan esa situación sean juzgados indispensablemente al restablecerse el régimen constitucional. Pero creo que ahora no podemos dejar en el aire esta clase de sugerencias o de imputaciones.

Con relación a las manifestaciones que ha formulado a título personal el señor senador Amodeo, perteneciente a nuestro bloque, debo decir que vamos a votar el artículo 4º con sólo un aditamento, para cubrir la situación de que aparezcamos delegando en el Poder Ejecutivo una prerrogativa propia del Parlamento, a saber, el dictado de la Ley de Presupuesto de la Nación. No creemos que se esté violando el artículo 79 de la Constitución, porque aunque quienes han contestado el argumento han omitido esta circunstancia ya que tienen otra posición tomada, yo digo que la retribución de los jueces ya está alterada. No se trata de que la vamos a alterar, sino de que ya está alterada por la tremenda coyuntura inflacionaria y por la quiebra del sistema económico argentino operada en los últimos años y agravada en los últimos tiempos. De manera que cuando abrimos un nuevo cauce para la restauración de las retribuciones de los miembros del Poder Judicial estamos simplemente procurando que esa alteración tenga un término y sea superada de un modo legítimo, que será el que nosotros indiquemos por medio del artículo 4º, solamente con el aditamento de que la facultad que ejerza el Poder Ejecutivo por nuestra delegación debe ajustarse siempre a la previsión presupuestaria vigente en su momento.

En cuanto a las repercusiones que esta ley va a tener necesariamente en las provincias, a lo cual se han referido los señores senadores Bittel

y Leconte, reitero lo manifestado por el señor senador Bittel de que nuestro bloque va a proponer la inclusión de un artículo expreso en el sentido de que el Tesoro nacional acuda para solventar las dificultades que esta ley provocará en el ámbito de nuestras provincias, que en este momento tienen sus economías completamente quebradas por la incidencia de los factores económicos generales y también por la actitud del Poder Ejecutivo, que no es favorable para facilitar la recuperación de nuestras economías y la atención de nuestras necesidades presupuestarias. Estimo que esto constituye algo indispensable para las provincias argentinas, sea cual fue el signo de sus gobiernos locales.

No he pensado nunca que dependa del monto de las retribuciones de los jueces que el país tenga una gran justicia. Hay jueces que en todos los tiempos, aun en los de grandes penurias, han sido grandes jueces; y hay jueces que, aun en las épocas opulentas de la República, no han sido buenos jueces. Creo sí, firmemente, que es nuestro compromiso y nuestra obligación, en la etapa institucional que vivimos, proveer al Poder Judicial de las retribuciones para sus integrantes, sus funcionarios y sus empleados, porque es la condición necesaria para el restablecimiento total de la normalidad en nuestro país.

He querido decir estas cosas para fijar posiciones, porque pienso que sobre la satisfacción colectiva que tenemos y que vamos a provocar, debemos dejar puntualizados estos aspectos de nuestro pensamiento, que sirven, tal vez, para que en el futuro se estime que estamos obrando con sentido razonable para el bien de la República. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — Señor presidente: atento a que he sido aludido por el señor senador por Jujuy y sin ánimo de generar una polémica sino de dejar aclaradas las expresiones que he vertido en este debate y que ratifico en plenitud, debo dejar constancia de que he defendido la pureza de la magistratura judicial y he atacado las desviaciones que he visto estos días, en que han ocurrido hechos claros y terminantes que no conciben con la prudencia del hombre que tiene que administrar justicia y asegurar el debido proceso.

Lo hago en salvaguardia de la magistratura judicial. Y cuando he hablado en forma clara y concreta de que el juez debe rebelarse contra el atropello a la Constitución y a la ley, he fijado

una clara conducta de defensa de las instituciones, tanto en el Parlamento como en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial.

No he atacado en forma individual a nadie, pero sí he atacado hechos que no conciben con la pureza de la magistratura. En los momentos que vivimos, quienes asumen la responsabilidad de ejercer cargos integrando los poderes del Estado —Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo— deben actuar con la ponderación republicana de su debido juicio, con el respeto a la Constitución y con el sacrificio del cumplimiento de la norma, teniendo en cuenta el ejemplo de esos jueces que, como decía el senador de la Rúa, vivieron en la miseria pero fueron dignos jueces.

Quiero a la justicia cara, a la justicia con dinero, a la justicia que tenga todos los elementos necesarios, no solamente para que vivan el empleado y el magistrado, sino también para que pueda administrarse la justicia con mayor claridad. Pero quiero, ya sea en la pobreza o en la opulencia, la dignidad de la corrección al servicio de la Constitución.

Y si algún día debo ser juez integrante de este cuerpo lo que he vertido no me va a inhibir para administrar justicia, porque he hecho una apreciación del deber ser frente a hechos claros y concretos que la publicidad de todos los medios de comunicación me han puesto delante de mis narices.

Yo luchó por la Constitución. Y si en mi expresión de la defensa de la Constitución algún pedazo de barro he tirado tengo la dignidad de limpiarlo. Pero yo defendiendo la Constitución por sobre todas las cosas y a los que no les guste defenderla, a los que compadorean y viborcan al margen de la norma constitucional, si tienen la dignidad de poder vivir en defensa de los derechos que ellos quieren, que los ejerzan dentro de los canales que nos exige la Carta Magna, pero que no los violen porque no se puede administrar justicia y violar la ley. (*Aplausos prolongados en las galerías.*)

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Gass. — Quisiera hacer una aclaración, señor presidente. Si no he escuchado mal al señor senador por Jujuy, dijo que algunos pliegos de los señores jueces fueron aprobados parcialmente. Quiero aclarar, señor senador, que todos los pliegos de los jueces, salvo uno, fueron aprobados por unanimidad, no sólo en la comisión sino también en el recinto del Senado.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — A la alusión que ha hecho el señor senador Cass debo acotar que las circunstancias en que se prestan los acuerdos nos inhiben absolutamente a todos de revelar las situaciones producidas en el recinto.

Solamente hago la referencia concreta y pública de que los magistrados que están actualmente en sus funciones han sido propuestos por el Poder Ejecutivo. De manera que con ello he querido indicar que si alguno de esos magistrados ha cometido algún acto de los que aquí han sido señalados como irregulares, no es razonable que así se haga en este recinto puesto que el propio gobierno de la Nación los ha puesto en sus funciones y si deben ser relevados de ellas ha de ser a través del juicio político.

Yo no abro juicio. Sólo digo que nosotros somos los jueces de los jueces y que, si existe una conducta irregular por parte de alguno de ellos, la obligación primera y constitucional es denunciarlo por la vía del juicio político a fin de que oportunamente nosotros podamos sancionar la inconducta si es que se ha producido o, con nuestro voto de absolución, dejar en limpio la calidad del magistrado.

Este es el sentido que han tenido mis palabras: nada más y nada menos que se respete la Constitución y que no comprometamos opiniones anticipadas si no las vamos a sostener promoviendo el juicio político que indica nuestra Carta Magna para los casos de desbordes de las funciones o inconducta de los magistrados.

Sr. Brasesco. — Con el debido respeto que me merece el señor senador, considero que lo suyo es un prejuizgamiento que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Leconte. — Señor presidente: hoy destacábamos la madurez y seriedad de la jornada vivida en el Senado para hacer justicia con este proyecto de ley. Creo que las posiciones están claras y que las manifestaciones de cada uno definen la actitud personal y de los bloques. No demoremos más y votemos el proyecto, que así estaremos afirmando la justicia aquí en el Senado de la Nación. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Otero). — Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general.

Sr. Nápoli. — Como hay más senadores en la casa, solicito que se los llame para la votación.

Sr. Presidente (Otero). — Así se hará, señor senador.

—Se llama para votar.

Sr. Villada. — Deseo aclarar que hay quórum para la votación.

Sr. Leconte. — Podríamos votar en general.

—Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Otero). — Se va a votar en general.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Leconte. — Que conste que fue por unanimidad, señor presidente.

Sr. Presidente (Otero). — Quedará constancia, señor senador.

En consideración en particular.

—Se leen y aprueban los artículos 1º y 2º.

—Se lee el artículo 3º.

Sr. Britos. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Britos. — En nombre del bloque justicialista quiero proponer una modificación. El artículo 3º que estamos considerando dice: "Facúltase a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la promulgación del Presupuesto General de la Nación correspondiente al ejercicio 1986, a fijar la remuneración total de sus miembros". Propongo agregar allí lo siguiente:

"...dentro de las previsiones presupuestarias vigentes en su oportunidad", continuando luego con la redacción original.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — En la segunda parte del artículo 3º, donde dice: "...establecer adicionalmente, para los magistrados y/o funcionarios y/o empleados, una compensación funcional, la cual no podrá superar el 25 %..." propongo introducir una modificación para que esa redacción no se convierta en una cláusula que establezca privilegios o que pueda ser interpretada sin considerar el sentido de justicia social que tiene la norma. Se debe evitar que la facultad otorgada a la Corte sea utilizada, por ejemplo, para establecer un adicional del 25 por ciento para los magistrados y/o funcionarios, quedando excluidos de ese porcentaje los empleados.

Entonces, para que la cláusula se interprete con un estricto sentido de justicia social y para hacer cierto todo lo que hemos venido pregando en este debate, solicito que la redacción

de esa parte sea así: "... para los magistrados y funcionarios y empleados..." (*Aplausos y vítores en las galerías.*)

—Suena la campana de orden.

Sr. Presidente (Otero). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — De ese modo, siempre que se haga uso de la facultad acordada, será necesario proceder con un estricto y absoluto sentido de justicia social, evitando que ese 25 por ciento sea un privilegio para los magistrados y/o funcionarios. Se trata más bien de una cláusula reparadora para quienes ganan menos, que son los empleados. (*Aplausos en las galerías.*)

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Nápoli. — Señor presidente: tenemos delante de nosotros un dictamen firmado por unanimidad. Después de muchos sacrificios hemos logrado ese acuerdo entre todos los sectores representados en este recinto.

La presunta modificación que se propone, tal vez entre otras más, no fue hablada en lo más mínimo durante la reunión de presidentes de bloques realizada esta mañana.

Por ello entiendo que deberíamos pasar a cuarto intermedio para conversar este asunto que, debo confesar, nos toma de sorpresa. Es necesario que nos pongamos de acuerdo, tal como lo hemos hecho anteriormente. Insisto en que en la reunión de presidentes de bloques de esta mañana no se habló en absoluto de esta cuestión que, reitero, nos toma de sorpresa.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Britos. — En nombre del bloque justicialista debo hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, la reunión no se realizó esta mañana sino que comenzó después del mediodía y culminó luego de las 14.

En segundo lugar, nosotros no hicimos la redacción del dictamen. Acordamos los temas, pero yo recién me junto con el documento redactado después de las 18...

Sr. Nápoli. — El documento tiene su firma.

Sr. Britos. — Sí, lo he firmado, señor senador. Pero creo que usted se equivoca cuando dice que no es el momento de analizar o resolver cómo se va a sancionar este artículo. Estimo que éste es el momento pues el Parlamento es para legislar, para discutir; nosotros pensamos que si el compañero ha solicitado esa modificación, el Parlamento la debe considerar y el cuerpo deci-

dirá con su votación cuál es la norma que adopta. Luego proseguiremos con los restantes artículos.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — He firmado en representación de mi bloque el despacho en consideración pero interpreto que la cláusula inserta en el artículo 3º puede tener una doble interpretación y entonces, para evitar que resulte una norma de privilegio y que sea interpretada como una cláusula de justicia social, solicito que se modifique suprimiendo el "o" en los adicionales. (*Aplausos.*)

Esta modificación se solicita con un sentido de justicia social y aclaro que me levanté de mi banca y la consulté con el compañero presidente de bloque, y estimamos que se trataba de una cláusula interpretativa y de ninguna manera vulneraba el despacho.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

Sr. Marini. — Deseo adherir a las expresiones del señor senador Rodríguez Saá porque, como todos recordarán, cuando apoyamos en general este proyecto hemos señalado que inicialmente nos oponíamos a esta disposición enviada por el Poder Ejecutivo, porque se aumentaba a un sector de funcionarios en detrimento de los empleados de inferior jerarquía, reduciéndoseles de esa forma sus salarios y su participación en los porcentajes.

Ese ha sido el pensamiento de la comisión y yo apoyo las expresiones del señor senador Rodríguez Saá porque no hacen más que recoger el pensamiento expresado en este recinto, en el sentido de que pretendemos que haya verdadera igualdad de tratamiento para todos los funcionarios, desde el más alto hasta el de inferior jerarquía del Poder Judicial. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Berhongaray. — Señor presidente: deseo recordar algo que ya expresamos. El artículo 3º del despacho es producto de muchas horas de análisis, de conversaciones, de reflexiones, y en la reunión que se realizó hoy al mediodía con los presidentes de bloques, y a la que asistieron también otros señores senadores, estuvieron también presentes los representantes de las asociaciones gremiales de los empleados judiciales. Apelo al testimonio y a la hombría de bien de los señores presidentes de esos dos nucleamientos gremiales que estuvieron presentes y recuerdo que lo que se acordó por unanimidad fue

el texto del artículo 3º tal como está redactado en el despacho. Por eso, el bloque de La Unión Cívica Radical considera que la modificación de ese trabajo acuerdo verdaderamente viene a modificar todo el esfuerzo realizado.

He tenido que recibir hoy muchos agravios. Lamentablemente, no quería personalizar pero he tenido que asumir algún costo político por todo esto y lo hago responsablemente. Creo que todos estamos aquí adoptando decisiones y es por eso que apelo a la hombría de bien de los señores presidentes de bloques que estuvieron en la reunión y a los representantes sindicales para recordar cuál es el texto que se acordó unánimemente y que motiva que mantengamos nuestra posición en este momento.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Sánchez. — Señor presidente: hemos venido trabajando con afán desde el año pasado, pero no podemos negar que existe un gran desorden y que a veces se desliza alguna interpretación errónea sobre la técnica legislativa.

Es indudable que en los bloques se debaten los distintos proyectos y a veces se logran despachos por unanimidad, con la representación de todos los bloques, pero no necesariamente se tienen que aprobar así porque se puede advertir en el tratamiento de los proyectos alguna falla o se les puede agregar algo que los enriquezca como ha ocurrido en este caso en que el señor senador por San Luis propone suprimir el "o". Pienso que esta modificación en nada altera el sentido del artículo, sino que así se resguarda a todos aquellos que carecen de poder de decisión en cuanto al porcentaje, determinado por la Corte Suprema. Creo que de otra manera se limitaría la acción de los señores senadores en el sentido de aceptar a rajatabla la decisión de los bloques, ya que —reitero— en el análisis surgen a veces motivos para rectificar el texto de las iniciativas, o agregar o quitarles algo. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Villada. — Señor presidente: quiero referirme brevísimamente a las dos modificaciones propuestas para el artículo 3º. En el primer caso se trata de poner algún límite a la autorización que estamos concediendo al Poder Judicial, y en el segundo se pide la supresión de la letra "o".

Con respecto a la primera modificación, creo que este Senado tiene que ser consciente de que ya ha resignado facultades, tal vez en demasía. Nos estamos quedando con pocas facultades de las que nos otorga el artículo 67 de la Consti-

tución. Quiero recordar a los señores senadores, por ejemplo, que en materia impositiva hemos hecho concesiones, dejando al Poder Ejecutivo la capacidad de establecer márgenes de contribución, como ocurre con el IVA, para citar sólo uno de los impuestos. Hemos hecho concesiones con respecto a la facultad del Parlamento para contratar empréstitos. Hemos hecho muchas concesiones, en algunos casos explícitamente y en otros porque los demás poderes se toman la atribución, como ocurre con la facultad de arreglar el pago de nuestra deuda interna y externa. También hemos hecho concesiones en el inciso 10 del artículo 67, ya que es el Parlamento el que debe mandar a hacer sellar moneda y fijar su valor. También hicimos una concesión con respecto al inciso 5º, por el cual se fija la atribución de este congreso para establecer un banco nacional con la facultad de emitir billetes. Y podríamos seguir citando otros ejemplos.

Nosotros pensamos que con esta autorización estamos lisa y llanamente haciendo otra delegación, con el gran inconveniente de que resignamos nuestras atribuciones y damos a otro poder del Estado la facultad para establecer sin límites los topes de sus remuneraciones. Puede ser que esto se use para ir adecuando el sistema remunerativo hacia el punto al que empuja constantemente la inflación, pero con esta autorización muy bien podría, lisa y llanamente, superarse este tope. Por otra parte, repetimos continuamente en este recinto cuál es la situación de la Nación. Quizás, y esto ya lo vislumbramos, las remuneraciones no vayan al compás de la inflación porque la Nación no está en condiciones de atender pagos de esta naturaleza.

En consecuencia, me pregunto si resulta prudente que concedamos la facultad, que nos es propia, de fijar los gastos del Estado y, en este caso, los límites a los que debe adecuarse el total de las remuneraciones.

Por lo expuesto considero adecuadas las propuestas para esta primera parte. Con ello hacemos uso de nuestras facultades estableciendo que el Poder Judicial podrá fijar para las distintas categorías de empleados y para los magistrados el monto de sus remuneraciones, que en ningún caso deberá superar el tope que fije el Congreso cuando analice el presupuesto de gastos de la Nación.

Reitero que considero prudente y correcta la inclusión dentro del proyecto de esta limitación. En este sentido quiero hacerme eco de las palabras pronunciadas por el señor senador de la Rúa cuando señaló que no importa el tiempo cuando se analizan adecuadamente los temas,

con el objeto de lograr soluciones justas y completas, y yo agregaría, equitativas.

Solicito a los señores senadores que voten por la incorporación de este tope, pues no afecta en absoluto el texto del proyecto ni tampoco lo acordado entre los distintos representantes de los partidos y de las entidades gremiales que fueron escuchadas.

Con respecto a la segunda modificación propuesta, comparto la opinión vertida por el señor senador por San Luis. Esta tampoco afecta, en sentido alguno, lo acordado con las organizaciones gremiales. Creo que es el texto al que ellas aspiraban y que campeaba en el espíritu de los señores senadores que tuvieron una intervención activa en la búsqueda de la solución adecuada para este tema. Como lo señaló el vicepresidente de mi bloque, yo recién me interioricé del contenido definitivo del proyecto luego de las 18 de hoy. Por eso pienso que me asiste el derecho de opinar sobre su redacción y de solicitar la aprobación de las dos propuestas que, insisto, logran soluciones justas y completas.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Señor presidente: me referiré exclusivamente a la primera parte de la modificación que propone el señor senador Villada, teniendo en cuenta que el texto de todo el artículo fue producto —como ya se señaló en este recinto— de un largo análisis, de hondas reflexiones y acuerdos mantenidos entre las distintas bancadas y las entidades gremiales, con lo que se logró una ajustada redacción del proyecto, e introducir modificaciones podría sin quererlo alterar su significado.

Deseo señalar que para el supuesto de producir alguna indicación referida a limitaciones del presupuesto nacional de 1985, volveríamos casi seguramente a un punto de partida, quiero decir, podríamos deteriorar las bondades buscadas. Es lógico pensar que el Poder Ejecutivo procurará tener las menores erogaciones posibles frente al gran déficit de la Nación y en el presupuesto enviado al Congreso.

Creo que podríamos contrariar lo que se pretende al otorgar al Poder Judicial la atribución de fijar sus propias remuneraciones, con absoluta libertad, a partir de las cifras aquí indicadas, sin ligarlas a lo que pudiere establecer el presupuesto para el año actual. Así el Poder Judicial determinará los escalafones de sus magistrados, funcionarios y personal, contando para ello con una partida limpia en el presupuesto nacional, respetando así las inten-

ciones que se han tenido en cuenta en este momento. No se necesitará, pues, que el Poder Ejecutivo proyecte la partida, porque la decisión acerca del ajuste será exclusiva del Poder Judicial.

En cuanto a la transitoriedad hasta 1986, es lógico pensar que la decisión que adopte el Poder Judicial se avendrá a los mecanismos de ajuste que fatalmente tendrán que hacerse, como consecuencia de la inflación que nos está devorando y seguramente costará parar. En el presupuesto de 1986 figurará la cifra como proyecto del Poder Ejecutivo, pero sobre la base exclusiva de lo que ahora resuelva el Poder Judicial como consecuencia de esta ley.

De tal manera, señor presidente, estimamos inconveniente la introducción de la modificación porque podría tergiversar el espíritu de lo que se ha pretendido con este proyecto de ley. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Quería hacer una referencia sobre el acuerdo realizado entre los bloques. La modificación que he propuesto personalmente procura una mejor interpretación del artículo, de manera que esta facultad de la Corte para establecer un adicional de hasta el 25 por ciento sea interpretada con un estricto concepto de justicia social.

En este sentido el justicialismo hace y pide la modificación. De ninguna manera va a arriar la bandera de la justicia social. Por lo contrario, siempre que podemos y está dentro de nuestras posibilidades levantamos en lo alto de nuestros mástiles la bandera de la justicia social, que es la de los trabajadores argentinos.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Britos. — Quiero acudir a mi hombría de bien, como ha dicho el señor senador por La Pampa.

Hoy, señor presidente, discutimos este tema, lo analizamos, se hizo un borrador. No soy hombre de derecho, pero evidentemente estas letras tienen un gran significado. Parece que estamos ocultando algo, al borrar alguna de ellas. Y la actitud al legislar debe ser clara y cristalina. No debe quedar ningún tipo de duda, y si en este momento la podemos salvar debemos hacerlo.

No podemos hablar de que va a cambiar el presupuesto. Se ha actuado inteligentemente al demorar la sanción de este proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. Los sueldos se

debieron haber empezado a pagar en enero, y recién esto ocurrirá en abril. Hay en el presupuesto tres meses de ahorro para el Estado, que corresponde ahora distribuir equitativamente entre los que trabajan.

El proyecto anterior disponía que los magistrados se quedarían con un 4,5 por ciento de la parte correspondiente a los que trabajan, los empleados. Es decir, quien hizo ese proyecto inteligentemente le otorgó la parte más grande de la torta a los magistrados y la más pequeña a los trabajadores. Por eso, desde un principio nosotros no lo aceptamos. Pero cuando unificamos criterios —aclaro que no soy economista— se habló de que el presupuesto sería mucho menor que el que se había considerado en un principio. Por eso, no creo que con esta simple modificación atentemos contra lo que compartimos todos los sectores de los diversos matices políticos de este Senado de la Nación. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Berhongaray. — Señor presidente: a esta altura del debate deseo manifestar que creo que con toda lealtad se han esgrimido los argumentos por parte de los señores senadores. Parecería que acá se dijera que establecer uno u otro sistema es más o menos lo mismo. Entonces, yo digo: dejemos las cosas como están. Además, se ha dicho que la justicia social es una bandera del justicialismo, y yo lo acepto, respeto y comparto. Pero quiero manifestar que no es una bandera exclusiva; la Unión Cívica Radical, a través de casi cien años, ha dado muestras permanentes de su preocupación por el hombre argentino y por la justicia y reivindicaciones totales de nuestros conciudadanos. Además, ha dado muestras de que cree en la Justicia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación será la que tendrá que fijar, por nuestra delegación, los sueldos de todos los integrantes del Poder Judicial. Pensar en que la Corte no actuará con justicia social, significa, creo yo, un agravio a priori.

—Silbidos en las galerías.

Sr. Berhongaray. — Señores: honestamente creo que si es la Corte la que deberá fijar los sueldos, si en ella hemos depositado, en última instancia, la seguridad, los honores y las honras de todos los bienes de todos los hombres de nuestro país, confiemos en ella porque sabe hacer justicia social y siempre hace justicia.

—Silbidos en las galerías.

Sr. Presidente (Otero). — Como única advertencia a la barra diré que será desalojada de inmediato en cuanto se vuelva a expresar como lo hizo recién.

Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Salim. — Señor presidente: a través de las exposiciones de los señores senadores observo que hay alguna duda en cuanto al artículo sobre el que el señor senador por San Luis propone la modificación; creo que aquí no debe quedar duda alguna acerca de la interpretación. Porque, si no, después tendrán que reunirse los juristas para dar una interpretación que puede ser arbitraria o antojadiza.

Creo que la modificación propuesta es aceptable porque ese artículo, tal como lo mencionó el señor senador Britos, debe ser claro y terminante.

Creo que de una vez por todas —y digo esto sin ningún propósito electoralista— este Senado debe producir un hecho que marque un hito en la historia argentina. Alguna vez tendrá que ocurrir que estos incrementos salariales no beneficien a los sueldos altos en perjuicio de los más bajos. Por eso presto mi aprobación a la observación formulada por el compañero Rodríguez Saá en cuanto a la supresión de la letra "o" y que quede "magistrados, funcionarios y empleados". *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: sólo quiero manifestar mi extrañeza ante la rigidez evidenciada por algunos señores senadores en cuanto a introducir modificaciones que se proponen en el curso del debate.

No es ésta la primera vez en que se trata un despacho unánime y se proponen y aceptan modificaciones cuando se advierte con posterioridad, en el curso del debate, la necesidad de perfeccionar el proyecto. Si actuáramos de otra forma parecería que el cuerpo viene aquí a decir "amén" a las resoluciones que toman los presidentes de bloque o las comisiones.

En algunas oportunidades hemos tratado dictámenes que han venido aprobados por unanimidad, y se han introducido modificaciones con la aceptación de todos los integrantes de este honorable cuerpo. Por ese motivo les pido a los señores senadores que flexibilicen su posición, que recuerden que éste ha sido el método de trabajo que hemos venido aceptando y que de una vez por todas votemos ese proyecto en su versión más perfecta posible para darle al Poder Judicial la ley que se merece. *(Aplausos en las bancas y en las galerías.)*

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. Bittel. — Señor presidente: quiero señalar mi extrañeza, por cuanto no me parece que se haya faltado a la palabra. Dije antes que un proyecto de ley es sometido al análisis de los señores senadores con miras a que se sancione una ley que contemple todos los intereses y que, en la medida de lo posible, sea perfecta. Yo no conozco el porqué de esta oposición al agregado a la primera parte del artículo 3º. No va en detrimento del Poder Ejecutivo; todo lo contrario, porque en definitiva poner una limitación relacionada con las previsiones presupuestarias es proteger al Poder Ejecutivo, que es el ente recaudador.

Estoy seguro de que si el señor ministro de Economía estuviera escuchando este debate estaría de acuerdo con nosotros, porque todas las reparticiones y los poderes tienen su presupuesto y deben moverse dentro de él. Con esta referencia a las previsiones presupuestarias vigentes queremos limitar las facultades del Poder Judicial.

En cuanto al segundo párrafo del artículo 3º, lo que queremos garantizar es que la bonificación de la que habla este proyecto sea para los magistrados, los funcionarios y empleados como una compensación funcional.

Creo que estamos discutiendo algo que consideramos beneficioso para el poder central, al limitar las facultades de la Corte Suprema, cuyo presupuesto sancionamos nosotros, dentro de las previsiones presupuestarias. ¿Qué pasaría si la Corte excediese estas previsiones? Habría que recurrir al señor ministro de Economía para que incremente las partidas. Por consiguiente, creo que esta previsión que proponemos es saludable para la administración pública de la Nación.

Sr. Trilla. — ¿Me permite una aclaración, señor senador?

Sr. Bittel. — Sí, señor senador.

Sr. Trilla. — No he defendido al poder central sino a la decisión que durante el año 1985 tiene que tomar casualmente el Poder Judicial para decidir sobre los sueldos y ajustes correspondientes, tal como está planteado el reclamo y tal como es el espíritu de este proyecto, no limitándolo a lo que el Poder Ejecutivo pueda determinar en su momento.

Por eso hacíamos el traslado a 1986, con lo cual durante el corriente año tienen que producirse los ajustes de remuneraciones, de acuer-

do con lo establecido en esta ley, y que según su intención deben aceptarse —esos ajustes— e incorporarlos en el presupuesto de 1985 como cifras definitivas.

Es decir, señor presidente, que estoy invirtiendo los términos: no estoy defendiendo al poder central, como generalmente lo hago como senador oficialista, sino que casualmente el espíritu de esta ley es que el Poder Judicial desarrolle al máximo sus potencialidades para crear la justicia propia en la distribución *per se* de las remuneraciones de todos sus integrantes, desde el presidente de la Corte Suprema hasta el último de los empleados judiciales.

Estoy invirtiendo el ordenamiento, ya que una vez realizados los ajustes para 1985, las cifras que surjan deberán incorporarse al presupuesto de este año. En 1986, como ya se habrán producido los ajustes, todo se relacionará con la partida que el Poder Ejecutivo asigne en su presupuesto.

Reitero, señor presidente, que en esta ocasión no estoy defendiendo al poder central sino el espíritu de esta ley.

Sr. Rodríguez Saá. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Otero). — Para una aclaración, tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: quiero formular una aclaración acerca de palabras vertidas por el señor senador Berhongaray, con todo respeto a su persona, en el sentido de que él confía en que la Corte Suprema de Justicia va a actuar con justicia social. Quiero decirle al señor senador Berhongaray que yo no confío en que la Corte Suprema va a actuar con justicia social. (*Aplausos en las galerías.*)

Esto no es un agravio a la Corte Suprema. Creo que la Corte Suprema va a actuar dentro de la ley, y ésta debe tener el sentido de la justicia social. (*Aplausos en las galerías.*)

Nosotros hemos visto en muchos años de historia argentina, cómo en los órganos de administración de justicia se ha atrincherado la oligarquía de nuestro país. (*Aplausos en las galerías.*)

Yo he pertenecido al Poder Judicial y en 1976, cuando se produjo el golpe más nefasto de la historia argentina, el que habla renunció porque había jurado por la Constitución. Sin embargo, vi cómo muchos de los que tenían acuerdo corrieron a jurar por el Estatuto del Proceso. (*Aplausos en las galerías.*)

Por eso, señor presidente, aclaro que, personalmente, no confío en que la Corte Suprema va a actuar con justicia social. Sí confío en que la

Corte Suprema va a actuar dentro de la ley. Y la ley debe contener los principios de la justicia social. (*Aplausos en las galerías.*)

Sr. Presidente (Otero). — Recuerdo a los señores senadores que, de acuerdo con el reglamento, no se puede hacer uso de la palabra más de una vez. De lo contrario, vamos a pasarnos toda la noche reunidos como si estuviéramos en comisión.

La Presidencia ha sido suficientemente elástica. Algunos señores senadores han emitido opinión cuatro, cinco y hasta seis veces y en todas las ocasiones muy bien fundadas. Pero me temo que estemos convirtiendo a la Cámara en comisión.

Se han escuchado todas las opiniones, por cierto que vertidas en el más alto nivel, pero ahora corresponde que pasemos a votar el artículo 3º según ha llegado a sus bancas con el dictamen de comisión.

Sr. Britos. — Pido la palabra para sugerir una modificación.

Sr. Lafferrière. — Se está votando, señor senador.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 4º.

Sr. Amoedo. — Que conste mi voto negativo.

Sr. Bittel. — Pido la palabra.

Sr. Lafferrière. — Se está votando.

Sr. Bittel. — Tiene que ponerse en consideración el artículo.

Sr. Presidente (Otero). — En consideración el artículo 4º.

Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. Bittel. — El artículo 4º dice: "Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, hasta la promulgación del Presupuesto General de la Nación correspondiente al ejercicio 1986, a determinar la remuneración correspondiente al presidente de la Nación". Observamos que se ha omitido al señor vicepresidente. Proponemos, por lo tanto, que sea agregado a este artículo junto con la frase "dentro de las previsiones presupuestarias vigentes en su oportunidad".

Sr. Berhongaray. — Señor presidente: simplemente por una cuestión metodológica el artículo 3º del proyecto sancionado por unanimidad en la Cámara de Diputados pasa a ser ahora el artículo 4º. Pensamos que lo señalado por el señor senador por el Chaco está comprendido aquí y solicitamos que se vote este artículo de acuerdo con el despacho unánime de comisión.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Señor presidente: vamos a insistir en que se agregue al final de este artículo "dentro de las previsiones presupuestarias vigentes en su oportunidad" porque de otra manera su texto importaría un desprendimiento de facultades que sin ninguna duda pertenecen al Parlamento y para lo cual no estamos autorizados. No podemos trasladar al Poder Ejecutivo la facultad de dictar su propia remuneración. Según nuestra institución fundamental, el Poder Ejecutivo es el presidente de la República y si decimos que autorizamos al Poder Ejecutivo a fijar la remuneración del presidente de la República, estamos diciendo que el señor presidente va a fijarse su propia remuneración. Esto sería ir contra el sistema republicano y lo más importante de nuestras instituciones.

Nosotros tenemos que decir que facultamos al señor presidente en razón de la emergencia que estamos viviendo y que esa facultad deberá ejercerse dentro de las previsiones presupuestarias vigentes oportunamente. Es decir, las previsiones presupuestarias que nosotros fijaremos.

Esto significa que no debemos trasladar una función legislativa al titular del Poder Ejecutivo. Por ello pido que los señores senadores consideren este argumento y comprendan que debe guiarnos el propósito de cubrir para el futuro, y para todos los tiempos, la posibilidad de que este Senado aparezca propiciando la delegación de una de sus facultades propias, al permitir que el presidente de la República fije su propia retribución. Si esto se hiciera, se afectaría la sensibilidad del propio presidente de la República por estar obligado a fijar su retribución, al delegar nosotros esa facultad en forma indiscriminada y tan genérica, como surge de la redacción original del artículo que propongo modificar.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Nuevamente debemos aclarar algunos aspectos relativos al Presupuesto para el año 1985, que aún no ha llegado al Senado y que está en plena discusión en la Cámara de Diputados. Además, hemos escuchado algunas preocupaciones de señores senadores provinciales, en el sentido de que no van a considerar el Presupuesto si antes no se tratan otros aspectos vinculados con la coparticipación federal de impuestos.

Como a través del proyecto de ley que estamos debatiendo se "desengancha" a una gran parte de la administración pública —que es el

espíritu de lo que hoy hemos señalado, procurando, en su lugar, los "enganches verticales"—, todo el personal "desenganchado" quedaría sin la posibilidad de aumentar sus sueldos hasta que se aprobara el presupuesto de 1985.

Por eso es que, con inteligencia, se ha dicho que esta norma que debatimos es transitoria hasta la promulgación del presupuesto para 1986, pues a partir de ese año ya comenzará a procederse normalmente, es decir, la elaboración de la propuesta por parte del Poder Ejecutivo, el estudio y análisis por parte del Poder Legislativo y la posterior aprobación de las respectivas partidas.

El "desenganche" que se establece por el artículo 1º del proyecto coloca al resto del personal de la administración pública en una situación difícil, en caso de que no exista una atribución legal para que el presidente de la República se aumente su sueldo. Si así fuera, todo ese personal quedaría demorado y esta situación grave es la que tenemos que evitar.

Este punto fue estudiado a fondo, al igual que el resto de los artículos, y entiendo que está bien redactado porque permite que, cuando se apruebe el presupuesto de 1985, ya estén reajustados los sueldos de la administración pública, de acuerdo con lo que establece el proyecto de ley que hoy vamos a aprobar.

No se trata de actuar con mayor o menor flexibilidad. Es una cuestión de rigidez intelectual para encarar el problema que se plantea. La aprobación del presupuesto para 1985 demorará bastante y, de aceptarse la proposición del señor senador por Jujuy, quedarían congelados hasta esa oportunidad los salarios de todos los empleados de la administración pública que van a quedar "desenganchados", de acuerdo con lo establecido por el artículo 1º del proyecto de ley en consideración.

Sr. Presidente (Otero).— Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Villada.— He escuchado las explicaciones dadas por el señor senador por la Capital con respecto a la necesidad imperiosa, casi imposterable que, según él, tiene este Senado de ceder, casi alegremente, las facultades que tiene al Poder Ejecutivo, aduciendo que el presupuesto nacional se quedará sin partidas para atender los aumentos de sueldos a que se ha referido.

Creo que ello no es cierto porque el Poder Ejecutivo tiene prorrogado el presupuesto correspondiente a 1984 para poder transitar durante 1985. Creo, con toda la prudencia del caso, que lo mínimo a donde se puede llegar con la prórroga del presupuesto de 1984 es hasta el 30 de

junio de este año. También entiendo que este tiempo podría extenderse más allá, de manera tal que con la autorización que tiene conferida al prorrogarse el presupuesto de 1984 cuenta con todas las facultades para realizar los aumentos que sean necesarios, por lo menos hasta la mitad de este año.

Pensamos que a pesar de alguna condición que formuló el señor senador por Corrientes respecto del presupuesto nacional, de ninguna manera va a sufrir una demora tal que el presupuesto para 1985 vaya a aprobarse más allá del mes de junio.

Quiero insistir en que no se trata únicamente de una cuestión de números o un asunto de remuneraciones. Pienso que es una cuestión de responsabilidad en la actuación de los señores senadores. Deben hacerse cargo y responsabilizarse de todas las atribuciones que les confiere la Constitución Nacional, y no es cuestión de que ante cualquier problema que se plantee se busquen soluciones que se vinculen con la renuncia de las facultades constitucionales. Por eso apelo a la sensibilidad de los señores senadores para que no sigamos cediendo nuestras propias atribuciones, pues por este camino finalmente vamos a llegar a quedarnos con muy pocos asuntos para poder tratar, analizar e incluso para poder controlar a los otros poderes del Estado, aspectos que son responsabilidad de este Parlamento.

Sr. Presidente (Otero).— Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Leconte.— Señor presidente: hay puntos de vista discrepantes con relación a los alcances de este artículo y hasta un cuestionamiento por inconstitucionalidad. Estimo que no estamos lejos de sintetizar todos los pensamientos y alcanzar alguna fórmula que salvaguarde las facultades del Senado.

Por lo expuesto, propongo que pasemos a un breve cuarto intermedio con permanencia de los señores senadores en las bancas, para evitar este diálogo que puede dilatar más allá de lo prudente la sesión, y en cinco minutos nos pongamos de acuerdo en estas posiciones antagónicas, pasando luego a la votación.

Como interpreto que existe la posibilidad de lograr ese entendimiento, hago moción para que pasemos a un breve cuarto intermedio de cinco minutos, con permanencia de los señores senadores en las bancas.

Sr. Presidente (Otero).— Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Nápoli.— Nuestro bloque apoya la moción formulada por el señor senador Leconte.

Sr. Britos. — Señor presidente: el bloque justicialista también apoya la moción formulada.

Sr. Presidente (Otero). — Si no se hace uso de la palabra se va a votar la moción formulada por el señor senador por Corrientes.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Otero). — Invito a los señores senadores a pasar a cuarto intermedio por cinco minutos.

—Son las 22 y 38.

—A las 23 y 11:

Sr. Presidente (Otero). — Continúa la sesión. Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Berhongaray. — Señor presidente: hemos tratado de armonizar las distintas posiciones y en un acto de buena voluntad llegamos a un criterio uniforme con respecto al artículo 4º. Nosotros vamos a aceptar la propuesta del bloque justicialista, de modo tal que al final del artículo, a continuación de las palabras "determinar la remuneración correspondiente al presidente de la Nación", el artículo diga: "dentro de las previsiones presupuestarias correspondientes".

Sr. Presidente (Otero). — Por Secretaría se va a dar lectura al artículo 4º con el agregado propuesto.

Sr. Secretario (Macris). — El artículo 4º queda así: "Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, hasta la promulgación del presupuesto general de la Nación correspondiente al ejercicio 1986, a determinar la remuneración correspondiente al presidente de la Nación dentro de las previsiones presupuestarias correspondientes."

Sr. Presidente (Otero). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban los artículos 5º y 6º.

Sr. Villada. — Pido la palabra para pedir la incorporación de un nuevo artículo.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Villada. — Señor presidente: quiero referirme en forma global al tema que venimos analizando y a las implicancias que esta ley va a tener en los estados federales que nosotros representamos como senadores. Quiero traer a la memoria de los miembros de este cuerpo la situación de cada una de nuestras provincias.

Los estados provinciales traen un arrastre de gran endeudamiento, cuyo origen ha sido tal vez nuestra poca previsión en oportunidad de tratarse el presupuesto del ejercicio 1984. En esa ocasión nuestra bancada insistió en señalar un desfase en el sistema coparticipativo y de ayuda federal del orden del 30 por ciento, que representaba aproximadamente 36 mil millones de pesos. Esta era la suma que nosotros pedíamos que se incluyera como apoyo para las provincias.

Lamentablemente no fue sancionado con esta cifra el presupuesto y nuestras provincias han transformado ese arrastre de treinta mil millones, por la maldita indexación, en aproximadamente cien mil millones de pesos.

En segundo término, quiero traer a colación un planteamiento respecto del presupuesto de 1985, en el que se vuelve a repetir exactamente esta figura. Las provincias tendrán que soportar una cantidad nominal mucho mayor que la de 1984 y un déficit en su apoyo de alrededor del 30 por ciento de lo que realmente están necesitando.

Finalmente, para completar el cuadro, voy a señalar la situación en la que se encuentra la única herramienta válida con que cuentan los estados provinciales para defenderse ante las circunstancias existentes; me refiero a los bancos provinciales. Salvo contadas excepciones este instrumento ha desaparecido como medio para que las provincias puedan apoyarse y defenderse. Por lo contrario, se han convertido en una carga más de sus gobiernos, que en muchas oportunidades deben encontrar una solución a través de los magros recursos que manejan.

Como conclusión puedo decir que estamos llegando prácticamente a un estado de paralización total.

Nuestra bancada, señores senadores, comparte la idea del Poder Ejecutivo, y la ha explicitado claramente. Queremos que desaparezcan los enganches horizontales u oblicuos; que cada uno de los poderes, instituciones o reparticiones fije su sistema de remuneración a partir de la cabeza. Entendemos que en la coyuntura difícil por la que estamos atravesando esto es necesario, con el objeto de imponer orden en el sistema de remuneraciones.

Compartimos la idea de la actualización de los sueldos de que con la sanción de este proyecto gozarán los judiciales, hecho que permitirá poner al día el sistema remunerativo de este importante sector de la Nación.

Pero no debemos olvidarnos de nuestra representación; no debemos olvidarnos de que esta ley se reflejará en nuestras provincias, ya que

muchas de ellas tienen sistemas de enganche relacionados con el régimen existente en el orden nacional, algunos establecidos por ley, otros por decreto y en los casos restantes por costumbre.

Por lo expuesto me pregunto, señor presidente y señores senadores, si es justo que demos solución al problema de la magistratura y de todos los compañeros que trabajan para el Poder Judicial en el orden nacional, olvidándonos totalmente de nuestras provincias, precisamente cuando nosotros representamos a esos Estados federales.

Considero, señor presidente y señores senadores, que no podemos dejar esto así, porque frente a la justicia que nosotros hacemos a través de esta ley, estamos cometiendo una injusticia al discriminar odiosamente a los magistrados y empleados del Poder Judicial de cada una de nuestras provincias, que seguramente se verán acicateados por esta conquista alcanzada en el orden nacional.

Por eso, señor presidente, señores senadores, los invito a que transitemos un poco por el camino de las soluciones integrales. De lo contrario, los parches que ponemos en un lado generarán problemas en otro. Necesitamos una solución integral para todos los sectores.

Ya que abrimos el camino de los desenganches para ir permitiendo soluciones paulatinas, aprovechemos la oportunidad para cubrir todo el espectro nacional. No dejemos abierta esta brecha, esta discriminación entre pares que trabajan en el orden nacional y en el provincial.

Se ha hablado aquí de la necesidad de buscar soluciones justas y completas. Estamos escasamente a un paso; hagamos un poco más de esfuerzo. Creo que con algo de meditación podemos terminar incluyendo un artículo más para dar una solución global.

Señor presidente; voy a proponer concretamente que se incluya como artículo 7º el siguiente texto: "El Tesoro nacional aportará los fondos necesarios para atender las mayores erogaciones que se originen en jurisdicción de las provincias por la adecuación que se produzca en las remuneraciones de los magistrados y agentes que se desempeñen en los respectivos poderes judiciales, como consecuencia de la sanción de la presente ley y en la medida de su incidencia...". Aquí se advierte la prudencia de quienes redactaron este primer párrafo del artículo.

El segundo párrafo del artículo que propongo dice: "El mencionado aporte tendrá el carácter de no reintegrable y el crédito necesario será incorporado al presupuesto general de la admi-

nistración nacional, con cargo al resultado del ejercicio". Por la redacción se colige que se ha trabajado con gran prolijidad.

Sr. Lafferrière. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Villada. — Sí, señor senador.

Sr. Lafferrière. — Mi inquietud busca comprender un poco mejor la propuesta. ¿De dónde sugiere el señor senador que saquemos esos fondos para las provincias? ¿Se sugiere un nuevo impuesto? En este caso, ¿a qué sector estará dirigido? ¿O se sugiere que lo carguemos a la emisión? En definitiva, ¿cuál sería la contrapartida en el presupuesto de esta erogación?

Sr. Villada. — Le contesto, señor senador.

He hablado de la prolijidad con que se ha redactado el artículo propuesto. Justamente el segundo párrafo señala que el aporte tendrá carácter no reintegrable y el crédito necesario será incorporado al presupuesto, con cargo al resultado del ejercicio.

En cuanto a la pregunta formulada por el señor senador acerca del origen de los fondos, respondo que provendrán de la recaudación de impuestos que haga la Nación. Si no alcanza, se procederá como hasta ahora, con la emisión correspondiente, para que las provincias salgan de los problemas urgentes que tienen.

Utilizaríamos la misma metodología que aplica el Poder Ejecutivo, y nosotros cada vez que analizamos el presupuesto establecemos los límites del gasto a los responsables en el manejo de los fondos del Estado.

Sr. Lafferrière. — Le agradezco la explicación, señor senador.

Sr. Villada. — Señor presidente: hago moción concreta para que se incorpore este artículo como 7º.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Señor presidente: en esta oportunidad debemos aclarar con mayor profundidad algunos conceptos referidos al presupuesto nacional.

Como sabemos, este presupuesto se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados y presenta las alternativas propias de los análisis que se están realizando; pero, fundamentalmente, dichas alternativas giran alrededor de las decisiones que se deben tomar a nivel presidencial para llegar a un acuerdo con las provincias sobre los fondos de coparticipación federal y en relación con los montos que deben ser aportados

a cada una de ellas en razón de los porcentajes determinados por ley.

Evidentemente, este paso debe ser previo a la aprobación del presupuesto nacional; es así porque para la mayor cantidad de fondos que se establezcan por ese concepto, deberá establecerse con claridad de dónde surgirán; es decir, de ninguna manera pueden resultar del incremento de los valores de emisión de moneda, tal como se dijo en este recinto, ya que esto sería lo más difícil de interpretar en cuanto a la financiación de un presupuesto de esta naturaleza.

Sr. Britos. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Trilla. — Cómo no.

Sr. Britos. — Estoy pensando en que estábamos a punto de aprobar un proyecto y, evidentemente, parece que no hay fondos para pagar.

Sr. Trilla. — No me dejó terminar.

Sr. Britos. — Se trata de una interrupción, nada más.

Sr. Velázquez. — Ahora llegan los fondos. *(Risas.)*

Sr. Trilla. — No me dejó terminar.

Sr. Britos. — Bueno, termine.

Sr. Trilla. — Una cuestión de esta naturaleza, nosotros —el sector de la bancada radical— la aceptaríamos si estos fondos se convirtieran en un anticipo, pero a cuenta de los valores que cada una de las provincias perciben en relación con los fondos de coparticipación federal.

Precisamente, sobre este tema se están realizando actualmente tramitaciones acaloradas; se está estudiando a nivel del Poder Ejecutivo cuáles serán los montos de distribución. Entonces, ese es el momento en que las provincias deben exigir la mayor cantidad de fondos posibles para solventar los gastos existentes y los que se produzcan a través de la modificación debida a esta u otras leyes complementarias.

Consecuentemente, el Poder Ejecutivo pondrá los valores reintegrables en materia de impuestos. Es decir, provocará la reforma impositiva que permita solventar estas mayores e ingentes necesidades de las provincias.

Si se contemplara una cuestión de este tipo en una ley de orden laboral como ésta, referida a la autonomía del Poder Judicial en cuanto a sus remuneraciones, donde se ha establecido la discriminación de los ajustes de tipo vertical —eliminando el horizontal y colocándolo en otros artículos de la misma ley— no se haría otra cosa que entorpecer la labor de tipo presupuestario y financiero de la Nación por cuanto

en cada una de estas leyes se afectarían los caminos conducentes a una real existencia de posibilidades.

Tal cual lo señaló el señor senador Leconte, las provincias se encuentran en oportunidad de posponer el tratamiento del presupuesto de 1985, hasta tanto se solucione el problema de la aceptabilidad dentro de las posibilidades que ofrezcan los fondos de coparticipación federal. El gobierno nacional deberá estudiar esas realidades, determinando con exactitud cuáles serán los recursos capaces de financiar ese fondo. Por otra parte, establecería reglas de juego que permitirían financiar sanamente, higiénicamente, el presupuesto nacional, es decir, por medio de la creación de los impuestos, únicos recursos genuinos, que vayan solventando los distintos ítem del presupuesto, y en este caso: los aportes a las provincias.

De esta manera evitaremos un mayor déficit presupuestario que, tal como se ha dicho acá, es uno de los factores fundamentales que alimentan la inflación. También lo es la falta de inversión, pero insisto en que una causa fundamental es el déficit presupuestario, por lo cual, en la medida en que contribuyamos a su incremento, favoreceremos desde estas bancas una mayor inflación. Si tenemos la capacidad suficiente para lograr en el nivel del conjunto la solución definitiva de tipo coparticipable para todas las provincias, obteniendo compensatoriamente los recursos genuinos correspondientes, habremos entrado en un camino más feliz en cuanto a la financiación presupuestaria y habremos eliminado carburante para el fuego de la inflación.

En este caso en el que estamos tratando una ley eminentemente laboral y afortunadamente llegamos a conclusiones definitivas que permiten afirmar que el proyecto da los mejores beneficios que se pueden alcanzar alrededor de este asunto, no tenemos que mezclar situaciones relacionadas con leyes especiales como las de coparticipación federal y presupuesto nacional, introduciendo mayor complejidad para las situaciones futuras.

Por eso aceptamos en principio algunas modificaciones, según la propuesta que he entregado a la Secretaría vinculadas con el artículo propuesto, en el entendimiento de que las provincias, hasta tanto hayan resuelto los problemas de coparticipación, no obtendrán su financiación genuina con ítem especiales incrementando su propio déficit en el que seguramente incursionarán como consecuencia de los ajustes naturales en las justicias provinciales. Pero mien-

tras tanto es lógico que el Estado financie los déficit de las tesorerías provinciales como consecuencia de estas mayores erogaciones. Proponemos entonces estos artículos tal como fueron redactados, con el agregado de que estos aportes serán a cuenta de la coparticipación federal, dejando todo esto librado al juego propio de las respectivas leyes cuando se analicen en profundidad en este cuerpo, lo que debe resultar de un acuerdo entre las provincias y el gobierno nacional.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Gómez Centurión. — Señor presidente: esta tarde, cuando estuvimos trabajando los presidentes de bloque en una reunión a la que se incorporaron algunos señores senadores, en el entendimiento de que estábamos buscando una solución feliz para este problema al que queremos darle una respuesta definitiva, quedó muy clara para todos la enorme preocupación que compartíamos respecto de lo que les va a ocurrir a las provincias en cuanto comiencen a cumplir, ya que casi todas tienen ley de "reenganche" en relación con lo que cobra la justicia federal, con porcentajes mayores o menores. Por lo tanto, ante la perspectiva que ofrece el señor senador por la Capital proponiéndonos que aceptemos esto a cuenta de la coparticipación federal, pregunto si vamos a poder cumplir con nuestros empleados judiciales, nuestros funcionarios y jueces inmediatamente después de aprobarse este proyecto, o acaso llegará el momento en que empiecen a cobrar en Buenos Aires y no podamos pagarles en las provincias. En este último caso tendremos las huelgas y los planteos de los empleados, que se van a sentir justamente perjudicados porque nosotros, sus representantes, no hemos previsto la forma de solucionar ese problema.

El darnos a cuenta de la coparticipación federal me parece una muy buena salida. Pero pregunto: ¿cómo va a quedar el monto a repartir hasta el momento en que se aprueben este proyecto y el presupuesto nacional? Va a haber un lapso en el cual podemos crear opciones graves para las provincias, situación que tenemos que tratar de evitar a toda costa. Por eso pido que se considere la posibilidad de asegurarnos en qué forma nos van a poder dar lo que no tenemos, debido a que nuestra desconfianza obedece a que hemos sido varias veces postergados ante promesas recibidas, a veces hasta del señor presidente de la República, no obteniendo luego la misma satisfacción por parte de las autoridades competentes.

Esa es nuestra gran preocupación porque no queremos, de ninguna manera, buscarle una solución a la Nación creándole un problema a las provincias. Por eso solicito que se nos brinde algún tipo de explicación acerca de la forma en que se haría este aporte a las provincias para poder cumplir con lo que establece la ley que vamos a aprobar de inmediato.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Feris. — Señor presidente: esta mañana, cuando nos reunimos los presidentes de bloque, cada uno expuso con amplitud cuál era su pensamiento sobre el problema que íbamos a tratar.

En esta oportunidad no quiero repetir los argumentos que expresé esta mañana. Dijimos todos —creo que también coincidieron los senadores representantes de las provincias gobernadas por hombres del radicalismo— que la situación de sus respectivas provincias era tanto o más difícil que la de otras provincias del país. Pero como abrigábamos el propósito de dar solución al problema de los magistrados y funcionarios judiciales, elaboramos el proyecto que estamos tratando.

Hicimos algunas proposiciones para ver cómo se podrían acrecentar los recursos de las provincias, pero no se llegó a una solución práctica. Ahora escucho que el señor senador Trilla propone que se diga "a cuenta de la coparticipación federal". Esa es una definición imprecisa, porque "a cuenta de la coparticipación federal" no quiere decir nada. Lo que se reclama, como legítimo derecho de las provincias, es que se dé cumplimiento a los coeficientes que ya están establecidos por la ley.

Para buscar una solución a este problema, voy a proponer que, en lugar de decir "a cuenta de la coparticipación federal" se diga "en la medida que se incremente la coparticipación federal a la provincia" o algo equivalente. Vale decir que si no se produce un aumento en la coparticipación federal, las provincias no estarán obligadas a cumplir con la ley. En cambio, si se incrementa la coparticipación federal, porque el poder central atiende los requerimientos de las provincias, entonces sí la ley tendrá aplicación. De esa manera, nos colocamos en una situación clara y precisa frente a los requerimientos de los agentes de la administración pública que, con legítimo derecho, buscan solución a sus problemas. Pero lo haríamos demagógicamente y al margen de la seriedad con que se debe legislar, si ligeramente aceptáramos una cuestión que no iría más allá de las promesas.

Por lo tanto, señor presidente, sugiero que, en lugar de decir "a cuenta de la coparticipación

federal" se diga "en la medida que las provincias vean incrementados sus recursos de la co-participación federal".

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Señor presidente: las objeciones que se han formulado a la proposición del señor senador Villada no tienen suficiente consistencia frente a la realidad que estamos viviendo en cada una de nuestras provincias. Esa realidad es que nuestras provincias son todas deficitarias, que estamos soportando requerimientos sociales muy incisivos que no podemos atender y que están creando una situación que poco a poco se va haciendo insostenible en cada uno de nuestros Estados provinciales. Esto lo sabemos muy bien todos los hombres del interior porque permanentemente estamos compulsando esas necesidades y los apremios financieros de cada uno de ellos.

Incluso en algunas provincias nos encontramos frente a circunstancias que en cualquier momento pueden provocar un desborde o explosión de tipo social, porque cada día se advierte más una discriminación, una suerte de injusticia entre lo que sucede en el orden nacional y lo que ocurre en el provincial. Ante una misma categoría de funciones; ante un mismo esfuerzo por parte de los empleados, funcionarios, magistrados y gobernantes se plantea la existencia de un verdadero abismo.

Así, por ejemplo, cuando Ferrocarriles Argentinos tiene un déficit en la ejecución de sus tareas, de alguna manera el Estado nacional acude en auxilio de la empresa para que ésta pueda pagar a su personal. Pero cuando el problema se plantea en el ámbito provincial, los gobernadores transitan el camino ya habitual hacia la Secretaría de Hacienda de la Nación para mendigar los aportes, los pagos de las partidas comprometidas o el cumplimiento de las promesas efectuadas. Mientras tanto nuestros choferes por ejemplo, no cobran lo mismo que los de las instituciones nacionales.

Lo mismo podría decirse con respecto a los maestros. Cuando se decreta un aumento de retribuciones para los maestros nacionales —y la Nación casi no tiene maestros— las provincias deben aumentar a sus maestros en la misma medida, pero no tienen recursos para hacerlo.

Puedo citar también el caso de los agentes de policía. Si bien aquellos que pertenecen a mi provincia tienen el mismo riesgo y las mismas tareas que los de la delegación de la Policía Federal en Jujuy, perciben sueldos inferiores.

Estas diferencias entre el orden nacional y el provincial originan una quiebra de confianza y de espíritu de aceptación de la situación. Esto es grave. Y no se limita a los casos que mencioné sino que también comprende a los médicos, a los empleados de YPF respecto a los de Energía de las provincias y a muchos otros más.

Frente a este proyecto que estamos considerando hoy indefectiblemente ocurrirá que nuestros magistrados, funcionarios y empleados judiciales reclamarán el mismo tratamiento. Y en el caso de mi provincia es mayor el volumen de trabajo de los jueces provinciales que el de los jueces federales; sin embargo, resultará que los jueces federales van a ganar de acuerdo con lo que votemos hoy aquí mientras que los provinciales percibirán menos y van a reclamar que se los ponga en un pie de igualdad. Se dará la misma situación con los agentes fiscales, los secretarios de juzgado, los empleados, los auxiliares y hasta los ordenanzas, porque es lo mismo limpiar diariamente el recinto de un juzgado federal que el edificio de los tribunales de cada una de nuestras capitales de provincia. Es justo, entonces, que quienes desempeñan iguales tareas reciban la misma retribución; nadie lo puede discutir y nadie lo discute.

Se dice aquí que esto va a ocasionar el aumento del déficit nacional, pero yo pregunto: ¿con qué va a pagar el Estado nacional a los magistrados, funcionarios y empleados judiciales esto que estamos votando aquí esta noche si no tiene recursos? Tendrá que aumentar el déficit del presupuesto, lo que será una consecuencia más de una política social que el gobierno tiene que estar dispuesto a receptar, pero si lo hace para un sector del país debe hacerlo también para el resto de la República.

Sr. Lafferrière. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Martiarena. — Cómo no, señor senador.

Sr. Lafferrière. — Es simplemente para recordarle que con la sanción de esta ley no estamos alterando la partida que le vamos a dar al Poder Judicial de la Nación sino, en todo caso, reformando la distribución de tal partida. Es decir que el efecto en el presupuesto de la ley que vamos a sancionar será absolutamente neutro. Esto último no se cumpliría, de acuerdo con el razonamiento realizado, de aprobarse la modificación sugerida, la que sí tiene efecto presupuestario pues aumenta el déficit del presupuesto nacional, dado que propone una erogación que no está contemplada en el proyecto bajo análisis.

Quise aclarar esta cuestión, sin perjuicio de abrir luego la discusión sobre otros temas planteados por el señor senador por Jujuy con la amplitud y seriedad a las que nos tiene acostumbrados.

Sr. Martiarena. — Estimo que la observación que ha formulado el señor senador por Entre Ríos no es justa ni razonable porque, si se está reajustando el sistema de retribución del Poder Judicial de la Nación, ello traerá indudablemente como consecuencia el aumento de las remuneraciones, con el consiguiente efecto en las partidas presupuestarias de que habrá que disponer para pagar tales mayores erogaciones.

Basta advertir que el artículo 3º del proyecto de ley en consideración señala que la remuneración prevista para el mes de abril para un ministro de la Corte Suprema será de 430 mil pesos y todos sabemos que en la actualidad el importe que perciben es menor que esa cifra.

Para qué voy a seguir hablando de este tema si queda claro que el encadenamiento que habrá de surgir, por aplicación de esta ley, hará necesario disponer de mayores recursos. El Poder Judicial no genera sus propios ingresos para el pago de sus gastos, a pesar de lo deseable que sería la autarquía de ese poder, pero ésta no existe ni existirá por el momento. Por ello, va a ser el Presupuesto General de la Nación que nosotros votemos el que deba contener las partidas para aportar los fondos vinculados con el reajuste de retribuciones que se propicia.

Al considerar el presupuesto para 1985, si la suma de los recursos que la Secretaría de Hacienda y el Ministerio de Economía prevén en su proyecto no alcanza para cubrir esas mayores erogaciones, indudablemente se generará un aumento del déficit del presupuesto, aunque se pretendan utilizar otras expresiones para señalar esta situación, como "financiamiento necesario" o algo por el estilo. Si los recursos no alcanzan y los gastos son mayores, aumentará el déficit.

No podremos dejar de pagar lo que estamos aprobando esta noche. Si no alcanzan los recursos, se deberá contar con la asistencia y el aporte del Tesoro nacional. Se dice que estas erogaciones podrían ser atendidas con lo que se obtenga de la coparticipación federal.

Yo no voy a decir ninguna cosa nueva porque todo el país lo sabe y los provincianos como yo lo sabemos más que nadie. Me refiero a que desde hace mucho tiempo se está discutiendo con los funcionarios nacionales el tema de la coparticipación federal. Debo señalar que el presidente de la República, durante una audiencia especial concedida a los gobernadores de las

provincias, se comprometió en diciembre del año pasado a incluir en el presupuesto una partida de 510 mil millones de pesos para la coparticipación. Los gobernadores aceptaron ese ofrecimiento, a pesar de que el reclamo justo y legítimo señala que ello debe tener relación con la recaudación, ya que la Nación, de acuerdo con el sistema de coparticipación, toma a su cargo los riesgos de aumentar dicha recaudación impositiva, lo que no está sucediendo en los últimos tiempos.

Como dije, los gobernadores han prestado su conformidad para recibir los 510 mil millones de pesos de diciembre de 1984, a valores constantes. Es decir que esa suma deberá ser incluida en el Presupuesto nacional para 1985 con los reajustes que correspondan por la desvalorización monetaria. Eso es lo razonable y lo que el presidente de la Nación se comprometió a cumplir, además del compromiso que también hizo a nuestros gobernadores para atender, en la medida en que se justifique, el déficit presupuestario de cada una de nuestras provincias ocurrido en 1984.

Pero, ¿qué es lo que sucede? Prácticamente ya estamos en el mes de mayo y todavía no se ha concretado nada porque los funcionarios de la Secretaría de Hacienda plantean que los 510 mil millones de pesos —así fue incluido en el proyecto de ley que está tratando Diputados— deben ser considerados sin cláusula de actualización por desvalorización monetaria, con lo que nuestras provincias no podrán manejarse. Si no se actualizan los 510 mil millones de pesos, al paso que vamos, en el término de seis meses esa cifra equivaldrá a la mitad.

Mientras, se producirán los aumentos de las remuneraciones a los diversos estamentos del Estado nacional, las provincias no podrán desenvolverse y caeremos —como ya está sucediendo— en las huelgas de los maestros, de los empleados del Poder Judicial, y en la de los diversos agentes de la administración pública provincial. No podemos afirmar que vamos a volcar esto a la coparticipación federal porque no está establecida.

Creo que mañana tendrán una audiencia los gobernadores de las provincias para tratar este tema. Pero mientras esto no se dilucide no podemos colocar en este artículo que tomaremos la suma que resulte de la coparticipación federal si ésta no está determinada. En consecuencia, más razonable es que digamos que el Tesoro nacional acudirá con los fondos necesarios.

Los gobernadores de nuestras provincias van a discutir con el presidente de la República y

los funcionarios del Ministerio de Economía si este tema entra o no dentro de la coparticipación federal de acuerdo al monto que será motivo de coparticipación.

Naturalmente, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda pensarán que este proyecto que han votado los señores senadores y que eventualmente aprobarán los señores diputados, significa que no se dispone de los recursos y se resolverá si se puede dar o no algo más. Esa discusión se mantendrá en ese plano y analizando los números y los aspectos financieros de la República se determinará si esto es una mayor erogación y si va a entrar en el sistema de la coparticipación federal.

Me parece que lo que nosotros podemos hacer, aplicando un sentido de razonabilidad y tal como están en este momento las relaciones financieras entre el Estado nacional y los Estados provinciales, es aprobar la redacción que ha indicado el señor senador Villada, según la cual el Tesoro Nacional acudirá para cubrir las mayores erogaciones que necesariamente van a tener nuestras provincias.

Aclaro que en mi provincia ayer y hoy hubo paro de actividades en el Poder Judicial porque se está a la espera de esta ley. Si nosotros en las provincias no adoptamos las medidas indispensables, o si no hay equiparación o un razonable acercamiento entre las retribuciones de los funcionarios, magistrados y empleados judiciales de las provincias, con estas disposiciones que vamos a adoptar, evidentemente, nos vamos a enfrentar con graves problemas. Y recuerdo este aspecto a los señores senadores porque conforme con el artículo 5º de la Constitución Nacional, las provincias garantizan la administración de justicia, pero si se producen paros de los empleados judiciales, evidentemente, esa administración de justicia se tornará imposible. Entonces, las provincias argentinas nos encontraremos en la situación de estar violando la Constitución Nacional, pues de esta manera no se respetan nuestras autonomías provinciales.

No quiero ser dramático o alarmista, pero la realidad es la que escuetamente estoy planteando.

En cuanto a la afirmación de que ésta es una disposición legal de tipo laboral que no debería mezclarse con la parte financiera, aclaro que es una ley laboral pero que se refiere a la retribución del personal civil de la administración pública nacional. No es una ley laboral para fijar la escala de salarios de los metalúrgicos o de los textiles. En otros términos, esto lo va-

mos a pagar con los fondos del Tesoro Nacional, de manera que si bien es cierto que es una ley laboral, esta legislación laboral necesariamente repercute en el presupuesto de la Nación.

Con respecto a la propuesta que con tanta buena voluntad formuló el señor senador por Corrientes, hago notar que esta ley no es obligatoria para las provincias. Es para el Poder Judicial de la Nación.

Sr. Feris. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Martiarena. — Sí, señor senador.

Sr. Feris. — De acuerdo a lo que expresé, la redacción que propongo para el artículo 7º es la siguiente: "Las provincias quedarán adheridas —vale decir que no se les crea la obligación— a lo establecido en esta ley en la medida en que el Poder Ejecutivo incremente los montos que les corresponden por la coparticipación federal".

Sr. Presidente (Otero). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Me parece que tampoco salimos adelante con esa redacción porque cada una de nuestras provincias va a tener que manejar su propio sistema, sus propias relaciones con su Poder Judicial y con sus integrantes, de tal manera que deberá contar con sus propios fondos, y si la Nación no los provee, evidentemente no va a poder cumplir.

Se podrá decir que esto es un poco coactivo para el Poder Ejecutivo frente a la situación financiera de las provincias, tal vez deba reconocerse así porque estamos constreñidos por la necesidad de decir al Tesoro nacional que debe acudir para enjugar las situaciones que se van a derivar para las provincias de la aplicación de esta ley.

De lo contrario va a suceder como en el magisterio, en cuyo caso las instituciones protectoras u organizativas de la docencia reclaman el aumento de los sueldos y retribuciones.

En Jujuy es la provincia la que debe pagar, pero no tiene los recursos y la coparticipación ya cubrió el tope, mientras la capacidad impositiva está colmada, y entonces no hay con qué pagar. En algunas provincias la situación se hace dramática: por ejemplo en Tucumán no se han iniciado las clases por causa de las reclamaciones del magisterio que no pueden ser satisfechas. Y en el resto del país todo el mundo sabe que se está sufriendo una huelga de orden nacional.

Por todas estas razones pido a nuestros colegas que consideren la situación para que vote-mos este agregado. Se nos dice que puede ocu-

rrir que los diputados no lo acepten, pero eso podrá ser por alguna razón de orden económico o político, que resulte después del debate y de un cambio de ideas en la otra Cámara. De todas maneras lo que estamos proponiendo es buscar la vigencia de lo razonable, la posibilidad de afrontar esto en cada una de nuestras provincias para que el sistema que queremos establecer no quede reducido al Poder Judicial y a sus integrantes en el orden federal, sino que se proyecte y llegue a todos los ámbitos de los Estados provinciales.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Lafferrère. — Señor presidente: no era mi intención intervenir en el debate, habida cuenta de que los senadores de todas las bancadas han estado dedicados casi exclusivamente a la redacción de una ley que diera satisfacción a los legítimos reclamos de los distintos sectores que componen nuestra nación.

Hemos dicho hasta el cansancio que la unidad es el reclamo básico y el valor insustituible para poder edificar una democracia estable en la Argentina, pero ahora nos encontramos con una realidad difícil, porque tenemos que partir de recursos escasos frente a carencias que son muchas, a expectativas de consumo que son grandes y a una realidad nacional de estancamiento que no es propia de este gobierno —ni tampoco hubiera sido propuesta por otros si el resultado electoral hubiese sido distinto—, sino que es el producto de factores muy rígidos a que fue sometida nuestra economía en los últimos años.

Tenemos una economía que no crece desde hace quince años. Tenemos un 25 por ciento más de población que en esa época, o sea una cuarta parte más de bocas argentinas para alimentar, con la misma economía estancada. Tenemos una deuda externa de 50 mil millones de dólares que no teníamos hace quince años. Tenemos una declinación de los precios de nuestros productos de exportación del 30 por ciento con respecto a valores históricos. Todo esto se traduce en condicionamientos dramáticos que nos obligan a tener claridad y objetividad, a tratar de actuar con la mayor profundidad y el mayor patriotismo posible, que yo descarto en todos los señores senadores y hasta en el último compatriota, porque no dudo de que exista esa vocación de cambiar la historia del país empujando a repechar la cuesta de tantos años de decadencia.

Esto nos obliga a bajar el tono para tratar de acordar entre nosotros las bases de nuestro destino, y tal vez a alzarlo cuando haya que pelear

contra el enemigo y no cuando tengamos que discutir entre nosotros.

Todos los que estamos aquí somos hombres políticos, y porque lo somos nos gusta mucho recibir aplausos; a mí seguramente más que a nadie me encanta luego de alguna intervención —quizás por algo de narcisismo que todos tenemos— ver rubricada la exposición por el consenso de muchos compatriotas; nos gusta estar al frente del torrente y llevar la bandera. Pero el hecho de ser hombres políticos nos obliga a tener templanza, sensatez y firmeza para pararnos frente a la corriente cuando estamos íntimamente convencidos de que no marchamos en el sentido correcto. Entonces, en algunas oportunidades, en lugar de recibir aplausos nos llegan silbidos y tomatazos.

Pero nuestro compromiso es con los intereses de la Nación, con esta patria que nació peleando con la pobreza de los soldados que atravesaron los Andes dando liberación a medio continente.

Decía San Martín —y lo puedo repetir sin que en esto se vea un agravio—: “En pelota cruzaremos la cordillera”. Lo puedo repetir porque son palabras de nuestro héroe máximo, quien entendía que el objetivo fundamental de nuestra nación era liberar a América latina. La pobreza no estaba generando reclamos sectoriales que podían deshilar lo poco que teníamos de la colonia que heredamos. Existía templanza para marchar hacia ese objetivo de unidad nacional y continental.

Hoy nos suceden cosas parecidas. Tenemos un país que no hemos empobrecido los argentinos que estamos en los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, sino que lo recibimos así por herencia. Tenemos que frenarlo en la cuesta abajo y ponerlo nuevamente en la senda ascendente.

Si existieran fondos, ¿cómo nos gustaría repartir! Estoy seguro de que el presidente de la República sería el primero en hacerlo, así como también descarto que todos los compatriotas dispuestos a repartir hasta el último centavo de lo existente. Pero si miramos lo que nos está sucediendo y el ejemplo de otras naciones de América latina que están marcando el rumbo, observaremos que si nosotros adoptamos ese camino seguramente llegaremos a una situación similar. Prueba de ello es la situación del hermano pueblo de Bolivia en el que los reclamos sectoriales se han exacerbado y en donde no existen fuerzas que hayan modelado un funcionamiento de unidad nacional sobre el cual asentar un destino compartido.

Entendemos que si no aceptamos que el presupuesto nacional —sin una contrapartida en los recursos— deba ser el que tiene que soportar el peso de los aumentos que no estamos en condiciones de dar, no es porque somos malos argentinos o no entendemos que hay que defender el bolsillo, la felicidad y la tranquilidad de nuestra población, sino porque tenemos sensatez y nos damos cuenta de que estamos al borde de la hiperinflación, que podría ser galopante, lo que dejaría a este gobierno y al que lo suceda sin el manejo de los instrumentos económicos necesarios para el crecimiento de nuestra economía.

Debemos entender que tenemos que volver a épocas de austeridad, repartiendo lo más equitativamente posible los sacrificios, pero sabiendo que no es una época de bonanza y que, sólo con un gran excedente de nuestra economía, podremos mejorar el nivel de vida de nuestros pueblos.

Señor presidente: estamos ante la situación de decidir de qué manera debemos distribuir el esfuerzo y los fondos. Como senadores de la Nación Argentina tenemos que sancionar una ley para la nación, contemplando los aspectos relacionados con nuestra competencia directa e indirecta y el reflejo que aquella tendrá en los sistemas provinciales. Pero fundamentalmente debemos tener en cuenta un tema relacionado con la administración central del país. Estamos tratando este proyecto debido a la existencia de una situación de injusticia respecto de los haberes del Poder Judicial. Luego de haber escuchado a todos los sectores interesados —políticos, gremiales, de la magistratura— tratamos de encontrar una solución que armonizara los reclamos sectoriales. Así logramos llegar por la tarde a un acuerdo. Hemos aceptado algunas modificaciones y rechazado otras porque entendimos que no se alteraba el espíritu general del proyecto. Pero en nuestras provincias se suceden situaciones similares; por ello debemos tener la templanza para poder llevar adelante, con la misma firmeza con que lo hemos hecho acá, comportamientos y actitudes que hagan de los hombres políticos dirigentes responsables de una Argentina en crisis.

En mi provincia teníamos el enganche judicial y hemos debido persuadir, soportando dos huelgas de empleados judiciales, a compatriotas nuestros que estaban convencidos de que el enganche con el Poder Judicial nacional debía seguir manteniéndose. Tuvimos que soportarlas y pelear un nuevo sistema de remuneración que finalmente se logró con el diálogo y el consenso,

que desvinculó a los haberes de los judiciales de Entre Ríos de la situación remunerativa del Poder Judicial nacional, produciendo un enganche propio sobre los haberes de los ministros del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

No tuvimos miedo de discutir, porque estábamos convencidos de que defendíamos los intereses de nuestra provincia. No recibimos aplausos sino silbidos en muchos lados, pero no teníamos otra forma de hacerlo. Hoy podemos afirmar que la provincia de Entre Ríos, sin recibir un solo peso de más de los correspondientes a la coparticipación, muestra un presupuesto equilibrado; no podemos hacer grandes cosas porque no hay fondos, pero cada entrerriano ha comprendido la situación y ha puesto su granito de arena para hacer sensata la discusión sobre la distribución de los fondos.

Si nosotros tuviéramos margen para agrandar el presupuesto nacional, ¿qué nos podría preocupar el enganche de las remuneraciones de los judiciales de las provincias? Pero todos sabemos que no hay fondos. Todos sabemos que el déficit se ha agigantado, incluso por la declinación de la recaudación en los dos primeros meses del año, y si no ponemos un freno a la situación podemos terminar en la recesión, en cuyo caso estaremos en los umbrales de una Argentina cuya situación política será parecida a la de Bolivia, con segregación nacional y reclamos de los sectores sin punto de referencia. Esto obliga a la lucidez de sus hombres políticos, que podemos conducir a esta Argentina con austeridad, como lo hizo San Martín en su época, en el camino de la liberación continental, de la integración que tenemos que ir profundizando con otros pueblos que quizá viven mucho más pobres que nosotros en nuestro querido continente latinoamericano.

Creo, señor presidente, que si nosotros pretendemos con el artículo 1º de esta ley provocar los “desenganches”, tenemos que exhortar a las provincias a que actúen con el mismo criterio de repartir equitativamente los esfuerzos y los pocos fondos que todos tenemos. Los presupuestos provinciales están exhaustos y también lo está el presupuesto nacional.

Con la unión nacional y el fervor político que nos enseñaron los grandes hombres, los líderes de los partidos populares, estamos tratando de cristalizar la marcha por la historia de esta Argentina, poniéndola de nuevo en la senda de los próceres, a pesar de que a veces tengamos encontronazos o chisporroteos, en un desorden superficial que es propio de la democracia.

Por eso, entendemos que la sensatez en el manejo de las cuentas públicas es fundamental. Ha-

gamos este esfuerzo. Aprobemos el texto como estaba. Comprendamos que el presupuesto de la Nación no da para un "enganche" de este tipo. Admitamos que es necesario mantener el equilibrio de las cuentas públicas. Aceptemos la reflexión y la sugerencia que inteligentemente ha hecho el señor senador por Corrientes, de condicionar la posibilidad de los "enganches" provinciales y del aporte del Tesoro nacional al aumento de las recaudaciones.

Tomemos conciencia de que es muy grande nuestra responsabilidad frente a la historia nacional. Con el patriotismo que todos tenemos, seguramente podremos hacer una Argentina grande, si empezamos poniendo austeridad, sensatez, orden y también una equitativa distribución de los pocos recursos que tenemos para cambiar la historia de la patria. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Quiero hacer algunas aclaraciones. Nosotros, los peronistas, somos plenamente conscientes de la situación económica heredada por el gobierno de la Unión Cívica Radical. Nosotros, los peronistas, estuvimos y estamos dispuestos a acompañarlos en la unidad nacional para salir de esta situación económica social en que nos encontramos. Nosotros, los peronistas, firmamos con la Unión Cívica Radical en junio del año pasado, un documento que fue firmado por la señora de Perón en nombre del movimiento y del Partido Justicialista, y por el doctor Raúl Alfonsín como presidente de los argentinos y de la Unión Cívica Radical.

En ese documento, los radicales y peronistas decíamos que íbamos a trabajar juntos para pagar la deuda externa, pero discriminando la deuda legítima de la ilegítima. Mientras no efectuemos esa discriminación y querramos pagar toda la deuda —respecto de la que aquí, en este Senado de la Nación, se reconoció que más del 50 por ciento era ilegítima—, no podremos caminar bien.

Por otra parte, el señor senador Lafferrière nos invita a que hagamos austeridad y andemos en cueros. Pero parece que el puerto quiere andar con la moda europea y son las provincias las que deben andar en cueros. Ojalá que cuando llegue la hora de la verdad, la Unión Cívica Radical de los distritos nos acompañe con la grandeza que se nos solicita en este momento. Tanto en la provincia de San Luis como en la de Tucumán no han comenzado las clases. Vinimos a hablar con el ministro de Economía y dijo que no nos entregarán los fondos y que, a

partir de ahora, cuando se realice la actualización, nos darán el 90 por ciento.

Allí no empezaron las clases; allí la huelga está encabezada por dirigentes de la Unión Cívica Radical. Nosotros les brindamos la mano amiga a los compañeros y amigos radicales, pero que ellos nos ayuden en las provincias, porque es muy fácil que se nos pida que andemos en harapos cuando ellos llevan tapado de piel. Así no es la cosa. (*Aplausos.*)

Por eso no nos molesta que los señores diputados, que la Honorable Cámara de Diputados, no haga lugar a lo que sustentamos en el artículo 7º; pero que quede en claro que es el bloque de la Unión Cívica Radical el que no hizo lugar, para que después los distritos de ese partido no encabezen la huelga en contra de los peronistas. Hagamos todos juntos el esfuerzo. No nos lo pidan a nosotros, para luego hacernos una zancadilla. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Britos. — Señor presidente: ya ha pasado la medianoche y, prácticamente, se agotó el tema. Deseo hacer algunas reflexiones antes de solicitar un cuarto intermedio.

Comparto muchos de los conceptos vertidos por el joven dirigente de Entre Ríos. Hace mucho que venimos hablando de la unidad nacional. Creo que Perón, antes de morir, en reiteradas oportunidades nos aconsejó diciéndonos que si esto no lo arreglábamos entre todos, no lo arreglaba nadie. En ese momento teníamos una deuda de 7 mil millones de dólares y ahora debemos 50 mil millones de dólares.

Ahora bien, observamos algunas cosas como, por ejemplo, que a veces no hay sinceramiento. No puede ser, para citar un caso, que los empleados públicos de Río Negro ganen más que los de Neuquén. Da la impresión de que los doce gobernadores peronistas no sirven y que lo mismo ocurre con los de los partidos provinciales. Parece que hemos elegido lo peor, que no sabemos administrar a las provincias y da la impresión de que los radicales eligieron a los mejores: andan con "guita", hacen obras, tienen presupuesto y pagan bien. En la próxima oportunidad vamos a tener que elegir bien las boletas porque, quizás, los de ustedes son mejores y nos estamos equivocando.

Acá falta ese sinceramiento y eso es lo que nos está llevando al actual estado de cosas. Y lo que más temo es que, sin querer, se esté buscando un enfrentamiento hasta entre los trabajadores. Los compañeros que conforman una or-

ganización sindical saben que, por sobre todas las cosas, los principios se basan en mantener la solidaridad, y no creo que los compañeros judiciales de la Capital estén muy contentos sabiendo que a ellos se les va a aplicar esta ley mientras que los compañeros de San Luis no van a poder cobrar ni siquiera el 50 por ciento. *(Aplausos en las galerías.)*

Yo provengo de un gremio en el que ganan lo mismo el compañero que está en Comodoro Rivadavia, el que está en San Luis, el que está en Misiones: el gremio ferroviario. Trabajamos para todo el país, y hay un principio de solidaridad. Si tenemos un problema en Mendoza, en todo el país somos solidarios con los compañeros de esa provincia. Jamás abandonamos a un solo peón cambista, porque eso es lo que nos ha hecho fuertes.

Debemos tener cuidado al elaborar una ley tan trascendente como ésta, que fue pensada por un viejo dirigente radical respetado por todos, don Arturo Illia, con la intención de favorecer a este importante sector de los judiciales. Nosotros en 1974 también le hicimos un aporte a esta ley. Ahora somos conscientes de la situación porque atravesamos. Pero, dentro de este sinceramiento que destacaba recién el amigo, compañero, correligionario *(risas)* por Entre Ríos —todo eso significa para mí “compañero” *(risas)*—, queremos una distribución más justa. No deseo ver más a nuestros doce gobernadores golpeando en el Ministerio de Economía todas las semanas —porque antes venían los ministros de Economía y, como no les prestaban atención, aparecieron los gobernadores—. Es cierto que también vienen los gobernadores de ellos, pero mientras los nuestros vuelven con sus portafolios llenos de esperanzas, los de ellos vuelven cargados con guita. *(Risas.)*

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Gass. — La coparticipación federal para las provincias radicales es menor que para las provincias justicialistas. Tome por ejemplo el caso del Chubut.

Sr. Britos. — Algún día discutiremos todo esto en conjunto. Hablando ayer con amigos radicales les expresaba mi sensación de que el señor presidente, como decía en estos días Berhongaray por televisión, recién se encuentra con que los milicos nos han dejado empeñados e hipotecados. Antes del 30 de octubre de 1983 les decíamos por todos lados a nuestros compañeros —y por eso perdimos votos— que había que hacer esfuerzos, que no había guita para repartir. Mientras tanto los radicales decían que iban a dar

esto y lo otro. Claro, como no pensaron que iban a ganar, hicieron todo este tipo de cosas. *(Risas.)* Llegaron al gobierno, y nosotros estamos contentos, porque esto nos va a fortalecer más y nos ayudará a aguzar el ingenio. *(Risas.)*

No queremos ser mentirosos. Mas adelante haremos propuestas serias porque este país está quebrado, como bien decía el amigo radical.

Sr. Velázquez. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Britos. — Sí, señor senador.

Sr. Velázquez. — Es simplemente para manifestarle que mi provincia es una de las que tiene el mayor índice de mortalidad infantil, el mayor índice de analfabetismo y el mayor índice de déficit habitacional. Además, comparativamente con las provincias justicialistas, es la que menos ha recibido en cuanto a coparticipación federal se refiere.

Muchas gracias.

Sr. Leconte. — ¿Me permite una interrupción señor senador?

Sr. Britos. — ¡Cómo no!

Sr. Leconte. — Quiero decirle a usted, que además de senador es representante de un gremio ferroviario que tiene más de cien mil trabajadores, que terminamos de hablar con los representantes de la Federación de Empleados Judiciales, y resulta que la mayoría de los empleados judiciales son los de la Capital Federal y los de la provincia de Buenos Aires, que superan los diecisiete mil agentes. En todas las demás provincias, desde Santa Fe hasta la última, los agentes judiciales no superan los doce mil, de tal modo que las cifras que pueden gravitar en el presupuesto nacional son ínfimas dentro de una burocracia que supera el millón de personas y que constituye un lastre para el país. *(Aplausos en las bancas y en las galerías.)*

Sr. Britos. — Gracias por ilustrarnos.

Voy a tener que contestarle al compañero senador Velázquez. En nuestra provincia no tenemos esa estadística porque estamos peor: ni siquiera tenemos para pagarle a los empleados que la hagan. De modo que desconecemos esos datos en nuestra provincia *(Risas.)*

Para terminar, señor presidente, y poder pasar a un cuarto intermedio después de que hagan uso de la palabra los compañeros senadores, quiero manifestar que nuestro bloque va a hacer todo lo posible para encontrar una coincidencia entre las propuestas del señor senador Villada, la que formula el señor senador por Corrientes y la presentada por los compañeros radicales.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. Bittel. — Señor presidente, señores senadores: voy a tratar de mantener la calma. Pero quiero hacer un agregado, porque no es como dice el senador por Corrientes cuando habla de las provincias que se adhieran. Acá no va a haber posibilidad de adhesión, porque las organizaciones, gremiales de las provincias que tienen "enganche" van a requerir que ellas se adhieran, es decir que pongan en práctica lo que ya es ley.

De manera, entonces, que no habrá posibilidad de elegir. Por eso discrepo con lo que dice el senador Feris —con todo respeto—, ya que no se trata de las provincias que se adhieran. Acá no va a haber otra alternativa que hacer lugar a las justas reclamaciones que formularán los sindicatos judiciales de todas las provincias argentinas.

Esto vale tanto para las provincias gobernadas por representantes de los partidos provinciales como para aquellas al frente de las cuales se hallen hombres del justicialismo y del radicalismo, porque las pautas salariales las fija el gobierno de la nación y nadie se aparta de ellas.

Acá va a suceder exactamente lo mismo. Si nosotros no tomamos las previsiones del caso para cumplir con las justas reclamaciones que se formulen, desde ya podemos anticipar que vamos a tener huelgas que pondrán en peligro el normal funcionamiento del Poder Judicial, según lo establece el artículo 5º de la Constitución Nacional.

Esta es la razón por la cual no podemos hablar de algo a cuenta de la coparticipación federal. La Nación tiene otros recursos que no poseen las provincias, porque éstas no pueden emitir moneda.

Nosotros queremos mantener la paz de la República. No es cuestión de que, como se dijo acá, ésta sea una ley justa. Yo me siento realmente feliz de votar una ley justa, que beneficia a los empleados y magistrados judiciales de la Nación. Pero también debo suponer, porque soy representante de un Estado federal, que este tema se va a transferir a nuestra provincia. Entonces, ¿qué le vamos a decir a nuestros gobernadores si no hemos expresado de viva voz nuestro pensamiento requiriendo que la Nación comprenda esta angustia y nos auxilie financieramente para dar cumplimiento a una requisitoria que es justa?

Esta no es una actitud contraria al gobierno nacional; es una requisitoria que hacemos las provincias para dar cumplimiento a los pedidos

que van a producirse en el corto plazo, luego de que se sancione esta ley.

No es cuestión, señor senador por Corrientes, de adherir o no, porque la mayoría de las provincias argentinas tienen una ley de "enganche" y van a seguir sosteniendo las pautas salariales que fije esta ley de la Nación.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Sánchez. — Señor presidente: es indudable que el tratamiento de los proyectos que consideramos se dilata en razón de que siempre surge la tremenda crisis que vive el país. También es cierto que cada ley que votamos luego de arduas discusiones pone de manifiesto la caducidad de un régimen demoliberal, que ha conducido al achicamiento de la República en torno al puerto de Buenos Aires.

Sr. Leconte. — No comparto su criterio, señor senador. Ojalá hubiera una vigencia plena del liberalismo.

Disculpe la interrupción, señor senador.

Sr. Sánchez. — Son conceptos distintos.

Es así como este gigantesco Moloch devora todos los días al país real. Es indudable que para que esta situación se revierta se necesita la decisión política que, sin lugar a dudas, están señalando todos los sectores políticos del país y los movimientos populares.

Cuando se trata de situaciones como la que estamos considerando observamos que cada señor senador, con lógica preocupación, habla de su "casa", diciendo "mi provincia", "mi gobernador". Aquí no se trata de parcializar. Estamos dentro de un contexto global. Es todo el país el que está en crisis.

Existen leyes como ésta, cuya justicia no es necesario ya destacar porque ha sido perfectamente puntualizada, pero que provocará un estado de conmoción porque las provincias no podrán pagar sin la ayuda del Estado nacional.

No podemos dejar abandonadas a las provincias, sea cual fuere el signo político de su gobierno; no podemos dejarlas libradas a sus propios recursos. La conmoción social se va a producir y a agudizar, pudiendo llegar a límites peligrosos.

A cada momento, señor presidente, hablamos de la unidad nacional. Pero ésta sólo se logrará cuando todos tomemos la decisión política de darle al país un signo nacional, de romper con los lazos que nos atan a la usura y a los grandes centros internacionales de poder. Diariamente y en cada una de las situaciones que se plantean observamos el estado de dependencia en que se encuentra el país. Precisamente días

pasados se hizo pública la zozobra de los diabéticos ante el anuncio de que un laboratorio abandonaba el país, quedándose éste sin insulina.

Para acabar con nuestra dependencia es necesario que tengamos el valor de tomar conciencia del paso que vamos a dar y que todos los argentinos realicemos un esfuerzo para salir adelante. Esto no será posible mientras continuemos con la especulación y el aparato productivo paralizado. No podrá concretarse la unidad nacional en tanto todos sigamos jugando en la bolsa, al dólar y a los Bonex, olvidando que sólo el trabajo fecundo produce la "torta" a que hacía referencia el señor senador por Entre Ríos; cuanto más grande sea, mayor será la porción que toque a cada uno de los habitantes que la amasan con su esfuerzo.

Es necesario que tomemos esa decisión política a que aludí antes, que de una vez por todas nos planteemos y elijamos el camino que nos lleve a ser una nación digna. Esto tal vez parezca una digresión, pero repito que todos los proyectos que se discuten caen siempre en lo mismo, generando una situación que ya es insostenible. Mientras las provincias sigan absorbidas, chupadas por esta tremenda macrocefalia, no habrá solución.

Volviendo a la cuestión, no hay provincia que pueda absorber esos aumentos y entonces tendremos una huelga generalizada de judiciales, porque la solidaridad a que tanto se hizo referencia tendrá que hacerse sentir cuando en alguna provincia se decreta una huelga y todos los empleados judiciales de la Nación deban adherirse al reclamo de los empleados provinciales, que no percibirán los beneficios de esta ley.

Yo entiendo que el esfuerzo lo tiene que hacer el Estado nacional, concurriendo a través de los fondos de que disponga para que esta norma se cumpla en todo el ámbito del territorio de nuestro país.

Por esta razón creo que el artículo propuesto por el señor senador por Salta es lo más atinado, pues se ajusta a la realidad que vivimos. No podemos seguir jugando a los números que los tecnócratas nos brindan porque la realidad es bien distinta. Tenemos que tomar la decisión política y la única que se puede adoptar es que el Estado nacional debe concurrir en ayuda de las provincias para tratar de equilibrar sus pobres presupuestos y así seguir caminando hasta que el aparato productivo pueda recomponerse y suplantar a la especulación. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

Sr. Martiarena. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Otero). — De acuerdo con el artículo 143 del reglamento, cada orador sólo podrá hablar una vez para fundar su posición.

Sr. Martiarena. — Es para formular una breve referencia de valor histórico.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Quiero referirme a algo que se ha dicho aquí y voy a personalizar porque ello no implica de ninguna manera una agresión. Mi distinguido colega por Entre Ríos, el señor senador Lafferrère, con la elocuencia impetuosa de sus años mozos, que debemos tal vez envidiar los que tenemos tantos años, ha traído como argumento reiterativo en su exposición el tema de la unidad nacional y lo ocurrido con el Ejército de los Andes, señalando el ejemplo del general San Martín.

En homenaje a la verdad histórica debo decir que el general San Martín tuvo el apoyo de toda la República para su empresa libertadora. Habrá que revisar la correspondencia de San Martín con Pueyrredón para saber cómo desde aquí, la Capital, se proveía al Ejército de los Andes de todo lo que necesitaba, desmantelando lo que aquí había, para que pudiera seguir con su gesta emancipadora. Los provincianos del Norte dimos más que los bienes y hacienda de nuestros pobladores, porque la Guerra Gaucha fue dar la vida para cerrar el camino del Norte y permitir la epopeya sanmartiniana.

Sr. Presidente (Otero). — Si no se hace uso de la palabra, corresponde poner a votación...

Sr. Trilla. — Si me permite, señor presidente, le recuerdo que se había solicitado un cuarto intermedio para acordar la redacción final de este artículo.

Sr. Nápoli. — Reitero la moción de pasar a un breve cuarto intermedio en las bancas.

Sr. Britos. — Estamos de acuerdo con la moción formulada.

Sr. Presidente (Otero). — Se va a votar la moción de pasar a cuarto intermedio.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Otero). — Invito a los señores senadores a pasar a un breve cuarto intermedio, permaneciendo en sus bancas.

—Así se hace.

—Es la 0 y 35 del viernes 12 de abril de 1985.

—A la 0 y 56.

Sr. Presidente (Otero). — Continúa la sesión. Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Berhongaray. — Señor presidente: solicito que se informe cuáles son los textos que se han propuesto como redacción alternativa para el artículo 7º.

Sr. Martiarena. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Aclaro que nuestro bloque va a apoyar la redacción que ha propuesto el señor senador Villada para el artículo 7º del proyecto en consideración.

Sr. Presidente (Otero). — Por Secretaría se dará lectura a las propuestas de redacción del artículo 7º.

Sr. Secretario (Macris). — El señor senador Villada ha propuesto la siguiente redacción para el artículo 7º: "El Tesoro nacional aportará los fondos necesarios para atender las mayores erogaciones que se originen en jurisdicción de las provincias por la adecuación que se produzca en las remuneraciones de los magistrados y agentes que se desempeñen en los respectivos poderes judiciales, como consecuencia de la sanción de la presente ley y en la medida de su incidencia. El mencionado aporte tendrá el carácter de no reintegrable y el crédito necesario será incorporado al presupuesto general de la administración nacional, con cargo al resultado del ejercicio".

El señor senador Trilla ha propuesto la siguiente redacción: ...

Sr. Trilla. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Retiro la redacción que he propuesto, señor presidente.

Sr. Presidente (Otero). — Por Secretaría se continuará dando lectura a las propuestas de redacción del artículo 7º.

Sr. Secretario (Macris). — El señor senador Feris ha propuesto la siguiente redacción para el artículo 7º: "Las provincias quedarán adheridas a lo establecido en esta ley en la medida en que el Poder Ejecutivo incrementa los montos que les corresponden por la coparticipación federal".

Sr. Feris. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Feris. — Si bien es cierto que la proposición que formulé —y que se acaba de leer por Secretaría— tenía la mejor buena voluntad, al no haber encontrado el eco debido procedo a retirarla.

Sr. Presidente (Otero). — En consecuencia, sólo queda una propuesta de redacción del artículo 7º.

Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Berhongaray. — En nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, nos oponemos a la redacción del artículo 7º propuesta por el señor senador por Salta y mantenemos la posición que asumimos en la reunión de presidentes de bloque efectuada en la fecha, la que hemos cumplido en un todo, punto por punto, y al texto acordado nos remitimos, es decir que el bloque de la Unión Cívica Radical no va a votar el texto que se propone para el artículo séptimo.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Britos. — Quiero señalar que si bien en el día de hoy hemos contraído algunos compromisos, ahora estamos legislando, y en el momento de legislar siempre después de un análisis se puede cambiar el texto.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Nápoli. — También yo quiero hacer referencia a la reunión de presidentes de bloque realizada esta mañana. Tengo que manifestar que en atención a la rectitud de procedimientos nosotros debemos ajustarnos a lo que acordamos esta mañana, cuando no existía ningún artículo 7º.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Britos. — La reunión a que se refiere el señor senador se debió haber hecho ayer, cuando nosotros la solicitamos. Evidentemente se está especulando, porque nosotros ayer teníamos despacho y la Unión Cívica Radical todavía no sabía qué iba a hacer, ya que solamente hoy se decidieron a celebrar la reunión. Yo llamé al despacho del presidente y al bloque de la Unión Cívica Radical porque había necesidad de debatir este problema, pero los amigos radicales estaban consultando con Economía, con la Pre-

sidencia y en todos los lugares donde podían obtener una respuesta. Ahora, a la apurada, quieren sacar un proyecto. Me parece bien y estamos de acuerdo en respetar el acuerdo adoptado, pero posteriormente esto se analizó en el bloque justicialista y mis compañeros —porque tenemos hombres que también saben derecho— dijeron que había que cambiar un artículo. A la reunión de presidentes de bloque de hoy concurrió el señor senador, que llevó dos amigos abogados; yo fui solito y no puede llevar a ningún compañero de mi bloque. De modo que esto está superado y podemos pasar a votar, pero que no nos digan los amigos radicales que estamos en contraposición con lo que habíamos hablado al mediodía.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Nápoli. — Quiero significar que la reunión de bloques a la que concurrió el señor senador por San Luis fue posterior a la de presidentes de bloque. Si se estructura una solución en una reunión y después los participantes modifican su posición, indudablemente nunca nos vamos a poner de acuerdo, y entonces las reuniones de presidentes de bloque están de más.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Britos. — Vamos a pedir que se vote lo que despachó anteanoche la comisión, ya que la Unión Cívica Radical produjo despacho más tarde. Nosotros lo teníamos despachado desde hace rato.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Leconte. — Para aclarar que nosotros participamos en la reunión de presidentes de bloque con representantes sindicalistas y allí manifestamos nuestra preocupación en el sentido de que la previsión que se discute se extendiera a todas las provincias. Es decir que al votar esta propuesta del bloque justicialista somos consecuentes con lo que habíamos expresado en la reunión. No somos infieles a nada ni estamos pecando de inconducta. Por eso quiero expresar que me voy a adherir a la propuesta del señor senador por Salta.

Sr. Presidente (Otero). — Se va a votar el artículo 7º propuesto por el señor senador por Salta.

—La votación resulta afirmativa. (Aplausos.)

—El artículo 8º es de forma.

Sr. Presidente (Otero). — Queda sancionado el proyecto de ley.

Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados¹.

7

MOCION

Sr. Britos. — Solicito que se pase a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Nápoli. — Entiendo que hay un proyecto que merece el tratamiento del Senado por causa de las expectativas que está produciendo en el ánimo popular, e indudablemente es de trascendental importancia porque también existen muertos. Entonces, como legisladores, tenemos la obligación de brindar a las personas encargadas de la prevención de estos delitos los elementos necesarios, con el objeto de satisfacer las necesidades populares.

Sr. Britos. — Le pregunto al presidente de la Comisión de Deportes desde qué fecha se encuentra este proyecto en dicha comisión.

Sr. Nápoli. — Desde el 23 de enero de 1985.

Sr. Presidente (Otero). — Existe dictamen de comisión y la opinión pública está esperando una respuesta.

Sr. Britos. — Si quiere opinar, señor presidente, le solicito que ocupe su banca.

Sr. Presidente (Otero). — De acuerdo, señor senador.

Sr. Britos. — He hecho moción de pasar a cuarto intermedio hasta el miércoles 17 de abril.

Sr. Nápoli. — En la última sesión se aprobó la moción de preferencia para tratar este tema en la sesión siguiente, es decir, en esta reunión...

Sr. Rodríguez Saá. — La moción de cuarto intermedio significa que vamos a tratar el proyecto en esta sesión...

Sr. Nápoli. — ...con despacho de comisión o sin él. En consecuencia debemos cumplir con la palabra comprometida en este recinto. Esto es fundamental.

Sr. Cass. — De cualquier modo, el señor senador por San Luis hizo una moción de orden que, aunque yo no comparta, corresponde someter a votación.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

¹ Ver el Apéndice.